

73
2ej



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
ARAGON

El Fideicomiso Inmobiliario en Zona Prohibida

T E S I S
QUE PARA OPTAR POR EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
ALBERTO COMONFORT HERNANDEZ



TESIS CON
VALIA DE ORIGEN

San Juan de Aragón, Estado de México,
Agosto de 1991



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO EN ZONA PROHIBIDA

INTRODUCCION.....4

CAPITULO I. ANTECEDENTES HISTORICOS.

A. GENERALIDADES.....	8
B. ETAPA PRECODIFICADORA.....	13
C. ETAPA CODIFICADORA.....	22
D. ETAPA DE LAS LEYES MERCANTILES ESPECIALES.....	27

CAPITULO II. ESTRUCTURA DE LOS FIDEICOMISOS CON INMUEBLES UBICADOS EN ZONA PROHIBIDA.

A. CONCEPTO.....	34
B. ELEMENTOS PERSONALES.....	37
C. PATRIMONIO FIDEICOMITIDO.....	48
D. FIDEICOMISOS PROHIBIDOS.....	55
E. EXTINCION DEL FIDEICOMISO.....	59

A. PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL.....	63
B. PARA DESARROLLOS HABITACIONALES O TURISTICOS.....	67
C. PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA.....	74
ANEXOS.....	77
CONCLUSIONES.	78
BIBLIOGRAFIA.....	82

I N T R O D U C C I O N .

El objeto del presente trabajo es presentar la solución que en la vida practica se da al problema de la inversión extranjera en inmuebles, dentro de la zona en que esta prohibido por el articulo 27 de la Constitución y sus leyes reglamentarias.

Por medio del fideicomiso y, siendo concretamente fideicomisarios, los extranjeros tienen la posibilidad de uso y disfrute de bienes raices en la zona prohibida, sin contravenir el sistema juridico nacional, y desarrollando de esa manera, las actividades industriales, comerciales o turisticas que prefieran.

A tal efecto, el estudio que se propone se desarrolla en tres capitulos, consistentes en, el primero en los antecedentes históricos del fideicomiso.

Un segundo capítulo se dedica exclusivamente a explicar la estructura del fideicomiso, su nacimiento y su extinción, las

prohibiciones que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la estructura en general de dicho negocio jurídico.

En el tercer capítulo se trata de las aplicaciones más importantes que puede tener un fideicomiso en el cual los fideicomisarios son extranjeros con ánimo de invertir o vacacionar en nuestro país.

Ante la próxima y casi segura suscripción de los tratados de comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, es muy importante revisar nuestro marco jurídico en lo referente a la reglamentación que tiene una destacada influencia en lo económico.

Lo anterior lo decimos fundados en que se considera que con el o los tratados, las fronteras de carácter económico van a desaparecer, aunque persistan las de carácter político.

Nosotros consideramos que el fideicomiso en general y en lo particular, el que se constituye para operar con inmuebles en zona prohibida, tendrá en el futuro sus mejores tiempos, que requerirán que los estudiosos del Derecho Mercantil puedan ofrecer soluciones, ante el indudable rezago de la ley.

ADVERTENCIA.

A falta de indicación expresa, los números de los artículos citados en el presente trabajo corresponden a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en vigor.

C A P I T U L O P R I M E R O

A. GENERALIDADES.

Nuestro Derecho Mercantil, regula el fideicomiso que es una figura propia del sistema anglo/norteamericano, y que en esos lares se conoce como "trust".

Solo puede celebrarse con la intervención de una institución fiduciaria, lo que le atribuye siempre el carácter de acto de comercio, e impide que se considere como un negocio oculto. [arts. 1, 2, y 346]

Se trata de un negocio formal que puede constituirse contractual o unilateralmente por disposición testamentaria, que no puede exceder de treinta años y que normalmente es traslativo de dominio. [arts. 352 y 359]

Las partes que intervienen son el fideicomitente o también llamado fiduciante, que es la persona que transmite los bienes y los afecta a la finalidad lícita y determinada, el fiduciario, que es la institución bancaria que recibe dichos bienes y a cuyo

cargo esta el cumplimiento de la finalidad pactada, y eventualmente, en cuanto puede ser el propio fideicomitente, el fideicomisario, o sea la persona señalada para recibir el provecho del fideicomiso. [arts. 347, 348 y 349]

Puede, en efecto faltar fideicomisario, porque el beneficiario del negocio sea el fideicomitente, en cambio el fiduciario nunca puede ser fideicomisario. [arts. 347 y 348]

La causa o el fin del negocio consiste en que el fiduciario realice los actos que le encomiende el fideicomitente, y destine a ellos los bienes y derechos que para ese efecto reciba.

Por una parte, con el conjunto de los bienes fideicomitidos se constituye un patrimonio de afectación que es el único que responde de las obligaciones que asuma el fiduciario en relación con los fines del fideicomiso, por otra parte, de ese patrimonio es titular el fiduciario, aunque el fiduciante puede reservarse derechos y obligaciones o corresponder algunos a terceros. [art. 351]

Con los bienes señalados anteriormente se realiza la finalidad en favor del o de los fideicomisarios, o del propio

fideicomitente como beneficiario del patrimonio fideicomitado.

Corresponde al fiduciario capacidad de goce y ejercicio aunque limitada por los fines del negocio y por los derechos que se haya reservado el fideicomitente, corresponde igualmente, a aquel la responsabilidad que es propia de su titularidad.

La actividad desarrollada por la fiduciaria debe ser lícita y determinada, y los bienes y derechos que pueden darse en fideicomiso, pueden ser de toda índole, salvo aquellos que conforme a la ley sean estrictamente personales de su titular. [art. 351]

Los bienes del fideicomiso se consideraran afectados al fin que se destinan, y en consecuencia, solo podrán ejercitarse respecto a ellos, los derechos y acciones que al mencionado fin se refieran, salvo que su constitución se haya hecho en fraude de acreedores. [art. 351]

Cuando el fideicomiso importa la transmisión de los bienes, se plantea un fenómeno que no es propio de nuestro sistema jurídico romanista y que consiste en la división del derecho de propiedad para atribuir ciertas facultades al fiduciario y conservar el fideicomitente otras, que en todo caso,

deben señalarse al constituir o modificar el fideicomiso.

En teoría esto crea problemas muy complejos y a veces insolubles, en la práctica da lugar a abusos por cualquiera de las partes del negocio.

Y a pesar de que esta institución debe considerarse como especial dado que escapa a reglas que son propias de nuestro sistema y de que, en consecuencia, debe limitarse su ámbito de aplicación a la consecución de fines y objetivos que siendo lícitos, no puedan obtenerse a través de otro u otros negocios que el ordenamiento regule, en la práctica ha desbordado todas las barreras, ha invadido y cubierto campos y funciones que debieran considerarse reservados a otros contratos, y propicia la violación de prohibiciones que no solo se aplican a ciertos negocios, sino que constituyen principios generales de nuestro derecho, como en los casos de la prohibición de adquisición de inmuebles por extranjeros, materia de esta tesis, los pactos comisorio, leonino, de retroventa, de simulación, de voto sobre acciones, el de no competencia, la responsabilidad ilimitada por deudas y otras.

Los fideicomisos se extinguen por el vencimiento de su término, por la realización de su finalidad o por hacerse esta

imposible, por convenio entre fideicomitente y fideicomisario, por revocación, si no se trata de fideicomiso irrevocable, y por la desaparición del fiduciario.

Expuestos los principales trazos de lo que es la institución que estudiaremos, pasaremos a continuación a exponer su desarrollo histórico.

B. ETAPA PRECODIFICADORA.

No existe unanimidad sobre el origen del fideicomiso, algunos afirman que se encuentra en el "fideicomisum" romano en tanto que otros han pretendido ver su origen en el "treuhand" germánico. [1]

Es probable que ambas instituciones hayan tenido influencia en la aparición del fideicomiso, sin embargo, ninguna de las dos ha sido determinante y habrá que buscar mas allá de lo jurídico el origen de los fideicomisos.

Remontemonos, entonces a las épocas en que los primeros fueron creados. El estado, como poder central, aun joven y no consolidado siente que dos fuerzas se le oponen, por una parte las congregaciones religiosas y por otra los señores feudales.

Para limitar la fuerza de las primeras utiliza el "statute of mortmain" o leyes sobre las manos muertas, para mantener a los segundos bajo su poder, confisca los bienes de los que conspiran contra el. [2]

[1] Cfr. Lepaulle, Pierre. Tratado Teórico y Práctico de los Trust. Pag. 11

[2] Ibidem.

A la fuerza hay que oponer la astucia, los monjes asesoran a las almas de su rebaño para que hagan donaciones a terceros que se inclinan a favor de las congregaciones y los nobles, antes de emprender la guerra contra el señor soberano feudal, ceden sus feudos a un amigo de confianza.

Aquí sucede un fenómeno muy interesante, cuando el señor feudal ha transmitido sus bienes a un amigo, ya no es nada, y lo sabe.

Entonces no es el derecho de propiedad el que le dará protección, es a la amistad, a la gratitud, en una palabra, a la confianza, a la que demandara en busca de abrigo.

En todos los tiempos y en todos los países, los hombres han visto mas allá de las reglas jurídicas y a veces han confiado tanto o mas en una palabra de honor que en una obligación jurídica estricta.

Del mismo modo, no nos es desconocido, que en circunstancias muy graves se ha confiado lo de más valor y estima en las manos de un amigo.

A la confianza, los anglosajones le denominan "trust", que precisamente es el nombre con el que designan una operación parecidísima al fideicomiso que se conoce en nuestro sistema jurídico.

La base del "trust" no se encuentra sino en la eterna astucia de la interposita persona.

No es la astucia del jurista que se refugia en la inteligencia de una construcción técnica, sino en el último recurso humano de quienes buscan en la amistad la protección que el sistema jurídico les negaba.

Es una astucia que puede servir en todos los dominios. Los nobles transmitían sus bienes a terceros para su "uso", que es el término que precede al de trust. Para eludir numerosos impuestos feudales "relief", "wardship", "marriage", los propietarios transmitían en "joint tenancy" sus bienes a un grupo de amigos. [3]

Ese grupo, mediante la sustitución de sus miembros que morían, alcanzaba prácticamente la inmortalidad, de suerte que la propiedad no cambiaba de manos.

[3] Idem. pag. 13

El propietario original estipulaba que los "jointtenantes" conservarían los bienes "in use" para el mismo.

Alguno que quisiera hacer su testamento en una época en la que estaba prohibido, privar a su esposa de sus bienes viudales, hacer una donación a una mujer casada, evitar todo formalismo en transmisiones de inmuebles, solo tenia que constituir un "use" para eludir cualquier dificultad.

Debe entenderse que el sistema jurídico de aquellos tiempos no recibiera con agrado dicha astucia, que por una parte tenia el definido propósito de eludir sus preceptos y, por otra parte contradecía sus bases fundamentales, puesto que quien era propietario según el "use" no lo era conforme al "common law".

Por lo anterior, el amigo, el "feoffee to uses" en que se había puesto la confianza, sintiéndose protegido por la misma ley a la que se había defraudado, desestimaba la voz de su conciencia y, en ocasiones se llegaba a quedar con los bienes que le habían sido confiados, expoliando descaradamente a quien había confiado en él.

Por otra parte, la víctima, que también había querido

aprovecharse de alguien, tenía que callarse.

Sin embargo, el use no solo estaba reservado a negocios turbios o secretos, había casos en los que era lícita y perfectamente transparente la honestidad contenida en la voluntad de celebrar este negocio.

Entonces, en este supuesto, la víctima de un fraude, evidentemente no tenía por que permanecer callado e impasible ante la injusticia.

Los escándalos provocados por tales protestas propiciaron que las comunidades se sensibilizaran en favor de las víctimas del fraude, sin embargo, no era posible acudir a los tribunales en busca de justicia en virtud de que el use contravenía el orden jurídico.

Por lo tanto la única salida era legitimar la figura a través de una ley que expidiera el parlamento.

Esto sucedió efectivamente en 1402, sin embargo no generó una satisfacción a los múltiples fraudes. [4]

[4] idem. 15.

Y como la necesidad de justicia de los hombres es algo que debe satisfacerse a toda costa, hubo que acudir entonces al Rey, lo cual era posible pues el soberano era conocido como la fuente de la justicia, colocado sobre todos los tribunales, capaz de pronunciar sentencias conforme a su conciencia y de acuerdo con la equidad, sin atenerse a las reglas de la jurisprudencia.

Siendo el Rey, un humano todopoderoso, delegaba sus facultades en una persona llamada Lord Canciller que era como su nombre lo indica "custodio de la conciencia del Rey", quien a su vez y ante la afluencia de casos, a su vez delego sus facultades en asesores, que terminaron siendo una categoría de magistrados.

En virtud de la fuerza jurídica que tiene para el sistema inglés la tradición y los precedentes, se conformo un cuerpo de jurisprudencia llamado por Ullmann "equity" [5] que no es sino un agrupamiento de reglas jurídicas escritas que no tienen por origen la costumbre o la ley escrita, sino los datos imperativos de la conciencia, reglas excepcionalmente creadas, deducidas y desarrolladas por ciertas Cortes de Justicia.

[5] Citado por Lepaulle, P. Obra Citada. pag.15.

Resultó, entonces, que las víctimas del "feoffee to uses" se dirigieran a solicitar justicia en las cortes de "equity", que como ya se dijo tenían la libertad de juzgar a verdad sabida y a buena fe guardada, que en cuanto a sus fallos, no dudaron en darles su apoyo.

Los uses, con el apoyo jurídico que encontraron en la Cancillería o cortes de equidad, experimentaron un gran desarrollo.

También los fraudes.

El Rey de Inglaterra, Enrique VIII, se vio obligado a promulgar en 1536 el "statute of uses".

El estatuto de los uses no los suprimió o declaró ilegales, sino que trató de regular el asunto estableciendo que el beneficiario sería considerado como único y verdadero propietario y que quien anteriormente tenía tal carácter, sería en adelante ignorado por el derecho.

La intención de lo anteriormente descrito era hacer

desaparecer al intermediario y muchas veces fraudulento individuo llamado "feofeee to use".

Es de gran difusión en el mundo del derecho la frase " The statute of uses executed the uses".

Como sucede siempre que se expide una ley prohibitiva, aquellos a quienes afecto el "Statute of Uses", no se tuvieron por derrotados, los que querían constituir uses sin intención fraudulenta unieron sus fuerzas contra el ordenamiento y buscaron sus fallas para eludirlo.

No tardaron en encontrar la forma, ayudados además por los tribunales de equity, la cual consistía en aplicar una interpretación muy estricta sobre el ambito material de validez del Statute, con lo que se dedujo que quedaban fuera de su regimen los uses que tenían por objeto bienes muebles los que recaían sobre un bien inmueble distinto de una libre disposición, los mandatos para actos de administración, todos aquellos en que se creaba un doble use.

Con lo anterior, especialmente lo mencionado en último lugar, quedaba restablecida la situación que el Statute of uses, había querido reordenar.

Según los autores, la elusión se manifestó principalmente en el cambio de nombres, con la conservación de la figura jurídica original.

El use se convirtió en "trust", el feoffee to uses en "trustee", el cestui que uses se volvió "cestui que trust".

El sistema de la equidad fue aceptado en la mayor parte de las colonias inglesas, no obstante que en un principio fue visto con justificada desconfianza, provocando las sospechas de los súbditos debido a las prerrogativas reservadas al Rey, así como que la justicia de equidad era administrada por los gobernadores reales, especialmente en Massachusetts y Pensylvania.

En los Estados Unidos de Norteamérica se adoptó el trust a partir del año 1743.

En Estados Unidos, el trust llegó para fomentar los grandes movimientos financieros y ha sido uno de los mejores instrumentos de los que se ha valido la economía norteamericana para apuntalar grandes objetivos de carácter económico.

C. ETAPA CODIFICADORA.

En el desarrollo de nuestra investigación no encontramos dato alguno que revelara la presencia de regulación sobre fideicomiso, o fideicomiso inmobiliario en zona prohibida en los Códigos de Comercio Mexicanos de 1854, 1884 y 1889.

Por otra parte, si encontramos abundante información sobre la génesis del artículo 27 de la Constitución que es el que establece la prohibición a los extranjeros para la adquisición de inmuebles en zonas fronterizas o costeras.

Sin ánimo de entrar en la amplia variedad temática del artículo 27, que sirve de fundamento constitucional a más de 20 leyes reglamentarias, expondremos a continuación los lineamientos que se refieren a la materia de la presente tesis.

El artículo 27 es uno de los preceptos fundamentales de la Constitución de 1917.

Junto con el artículo 123 se conforma la base fundamental

de los que la doctrina llama constitucionalismo social y constituyen los datos esenciales que dan originalidad al ordenamiento fundamental de Queretaro.

Este artículo refleja lo que fue nuestra realidad nacional, desde la Colonia hasta la culminación de la Revolución de 1910, y anuncia el programa revolucionario de la nación para la distribución equitativa de la riqueza.

Si no es analizado en razón de sus causas históricas, el artículo 27 puede parecer un tanto oscuro e incongruente, pero, los principios que contiene son consecuencia del afán de nuestro pueblo por alcanzar su libertad, su independencia, su destino propio y una vida digna y decorosa.

A pesar de lo anterior, el artículo 27 ha sido duramente criticado por el desorden en la ubicación de los muy variados temas que regula.

No puede perderse de vista que el artículo 27 fue el último en aprobarse por el Constituyente, precisamente en la madrugada del día en que fueron clausuradas las sesiones del Congreso. Los congresistas habían pospuesto indefinidamente el debate sobre el artículo 27, pues era claro que este precepto

encerraba la cuestión mas ardua que había encendido la mecha de la revolución, el regimen de la propiedad y las cuestiones agrarias.

El proyecto de artículo formulado por Molina Enriquez no fue aprobado, lo que obligo a Pastor Rouaix con otro grupo de diputados, a escribir con toda rapidez lo que sería el artículo 27, que posteriormente fue enriquecido por la comisión de puntos constitucionales.

La presión de tiempo, en alguna manera motivo que la redacción del artículo se manifestara en las condiciones en que se encuentra.

Entre el original artículo 27 y el que actualmente se encuentra en vigor, existen alrededor de 30 enmiendas, con base en 12 decretos.

Por lo que hace al tema de la presente tesis, encontramos que mediante un decreto de enmienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de diciembre de 1948, se autoriza a los Estados extranjeros para que puedan adquirir la propiedad privada de bienes inmuebles para instalar sus embajadas y legaciones, bajo los principios de prevalencia del interés

público y de reciprocidad.

Para finalizar con este apartado, solo queda afirmar que, ante todo, el artículo 27 establece nuestro régimen de propiedad, del cual dependen, en última instancia el sistema económico y la organización social.

La fracción I del artículo 27 establece la regla general de que solo los mexicanos o las sociedades mexicanas tienen el derecho de adquirir el dominio de tierras y aguas o sus accesiones, o bien para obtener concesiones de explotación de minas y aguas, sin embargo, en párrafos posteriores el artículo señala excepciones concretas.

En el caso de los extranjeros, la propia fracción I establece que podrán gozar del mismo derecho que los nacionales, pero bajo la Cláusula Calvo, por medio de la cual el extranjero interesado debe celebrar un convenio ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se comprometerá a conducirse como nacional respecto de los inmuebles que adquiera bajo pena de perderlos en beneficio de la nación, en caso de que intentara invocar la protección de su país de origen en relación a los referidos bienes. Los notarios públicos no tiran la escritura correspondiente a ninguna operación de este tipo, si el

extranjero no acredita haber obtenido el permiso respectivo.

También establece la limitación insuperable para que los extranjeros adquieran la propiedad privada de inmuebles que se ubican en la llamada "zona prohibida" que, por razones de seguridad nacional se encuentra en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 a lo largo de las costas.

A pesar de ello, el fideicomiso inmobiliario en zona prohibida, hace posible la presencia de extranjeros en estas zonas, con una calidad de hecho muy semejante a la de los que poseen el dominio de los inmuebles.

Si la razón de la prohibición fue la seguridad de la nación, cabe decir que la prohibición es obsoleta ya que cualquier extranjero puede constituirse en estas franjas, mediante la celebración de un fideicomiso que le permita su instalación.

D. ETAPA DE LAS LEYES MERCANTILES ESPECIALES.

Debido a que su origen no se encuentra dentro del Derecho Continental Europeo, el fideicomiso como figura jurídica no se encontró codificado, por lo menos en las leyes de nuestro país.

Como señalamos en el segundo inciso del presente capítulo, el antecedente inmediato del fideicomiso es el trust angloamericano, proveniente a su vez del antiguo use, consistente en la transmisión de tierras realizada por acto inter vivos o por mortis causa, a favor de un prestanombre, quien lo poseía a favor del beneficiario.

A principio del siglo XX, en nuestro país ya se había utilizado el trust como instrumento de garantía en emisiones de bonos destinados al financiamiento de ferrocarriles.

El Código Civil de 1884 y la Ley de Ferrocarriles de 1889, permitieron el uso del "trust deed" que mas se asemejara a los contratos de mandato, préstamo e hipoteca, que propiamente a lo

que ahora se conoce como fideicomiso.

A continuación ofreceremos una relación de la evolución del fideicomiso en la legislación de nuestro país.

Con fecha 24 de diciembre de 1924 se creo un ordenamiento que habia de publicarse en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1925, siendo Presidente de la República el General Plutarco Elías Calles.

Este ley abrogó el ordenamiento que en materia de fideicomisos habia regido desde 1897, se inicio la actualización de las leyes referentes a la actividad bancaria y crediticia mediante la ley denominada Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, en la que aparece completamente regulado el fideicomiso, por vez primera en nuestro derecho.

El artículo 6 fracción VII de dicho ordenamiento consideraba instituciones de crédito, para todos los efectos legales, a los bancos de fideicomiso.

El artículo 73 expresaba que los bancos de fideicomiso sirven a los intereses del publico en varias formas y

principalmente administrando los capitales que se les otorgan o interviniendo con la representación común de los suscriptores o tenedores de bonos hipotecarios, al ser emitidos o durante el tiempo de su vigencia.

La segunda ley en esta materia fue la Ley de Bancos de Fideicomiso, aprobada el 30 de junio de 1926 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 1926, que dió la primera estructura formal a la institución.

El artículo 1 de la mencionada ley expresaba que los bancos de fideicomiso tendrán por objeto principal y propio las operaciones por cuenta ajena y en favor de tercero que se autoriza y cuya ejecución se confía a su honradez y buena fe.

En su artículo 6 definía "El fideicomiso propiamente dicho es un mandato irrevocable en virtud del cual se entregan al banco, con carácter de fiduciario, determinados bienes, para que disponga de ellos o de sus productos según la voluntad del que los entrega, llamado fideicomitente, a beneficio de un tercero, llamado fideicomisario."

La tercera ley que se refirió al fideicomiso en nuestro país fue la aprobada el 31 de agosto de 1926, publicada el 16 de

noviembre de 1926 en el Diario Oficial de la Federación y se denominó Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios.

Como es natural, esta ley contiene una mas completa regulación de los temas relacionados con fideicomiso y dedica sus articulos 97 al 148 a tal efecto.

Con fecha 28 de junio de 1932 fue aprobada la Ley General de Instituciones de Crédito, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1932.

Define la exposición de motivos de esta ley al fideicomiso como " ... una afectación patrimonial a un fin, cuyo logro se confia a las gestiones de un fiduciario precisándose así la naturaleza y los efectos de este instituto que la ley actualmente en vigor concibe obscuramente como un mandato irrevocable..."

La Ley General de Instituciones de Crédito regula ampliamente en sus articulos 1,3,5, 91,92,93, 94,95, 96 y 228, la estructura del Fideicomiso.

La Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, vigente en la actualidad, fue aprobada con fecha 26 de agosto de 1932, y

publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.

En esta ley se regula el fideicomiso en sus artículos 346 al 359 y es indudablemente complementaria de la Ley General de Instituciones de Crédito.

Con fecha 31 de diciembre de 1982 se publicó la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, con motivo de la estatización de los bancos; esta ley fue abrogada por otra, con el mismo nombre, publicada el 14 de enero de 1985.

La Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1985, abrogó también a la Ley General de Instituciones de Crédito; ocupaba sus artículos 58 a 66 para referirse a los servicios que prestaban las Sociedades Nacionales de Crédito, entre ellos, los fideicomisos.

Con fecha 14 de enero de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, misma que sustituyó a la de 1941, que fue derogada, como ya lo mencionamos por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1985.

La ley de 1985, así como la de 1941, no se ocuparon del

fideicomiso, dejando el asunto en manos de la legislación relativa a los bancos.

Por último, agregaremos que con fecha 18 de julio de 1990 fue publicada la Ley de Instituciones de Crédito, que obedece a la política del Gobierno Federal de desestatizar bancos y que abrogó a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito de 1985.

La Ley de Instituciones de Crédito, actualmente en vigor regula al fideicomiso en sus artículos 1, 46 fracción XV, 47, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85. [6]

La regulación que establece en materia de fideicomiso la Ley de Instituciones de Crédito, se encuentra coordinada con la que existe en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la que no se opone, ni existe concurso real o aparente de normas.

[6] Véase anexo 1 al final de esta tesis.

C A P I T U L O S E G U N D O

A. CONCEPTO.

El fideicomiso nació en un sistema jurídico en el que las clasificaciones y las definiciones pasan a un segundo plano, ya que lo importante es la práctica diaria del comercio, misma que producirá las costumbres y normas a seguir, como se estila en el common law.

A pesar de ser de origen inglés, el fideicomiso ha tomado carta de naturalización en nuestro país y, para nadie es un secreto que el gobierno mexicano en una época no muy remota uso y hasta abuso de esta figura jurídica.

Sobre la definición del fideicomiso, tenemos en primer lugar que el artículo 346 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que "En virtud del fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria".

De la definición legal se han desprendido cuatro elementos, por lo menos, a saber: 1. Afectación de un patrimonio a la realización de un fin, 2. El fin debe ser lícito y determinado, 3. La realización de dicho fin queda a cargo de la fiduciaria y, 4. Los beneficios del fideicomiso pueden entregarse al fideicomitente o a el o los fideicomisarios, en caso de que los haya.

Martínez Domínguez es el primero en comprender la necesidad de analizar la naturaleza jurídica del fideicomiso; la doctrina considera al fideicomiso como un negocio fiduciario, e inclusive ha sido definido como aquel acto en que "una persona transmite bienes y derechos a otra, obligándose esta a aceptarlos para la realización de una finalidad lícita determinada y como consecuencia propia, obligándose a retransmitir esos bienes o derechos a un tercero, o restituirlos al fideicomitente. [7]

Rodríguez y Rodríguez establece que el fideicomiso es "... un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al fiduciario la titularidad dominical sobre ciertos bienes con una limitativa de carácter obligatorio, siendo esta la realización de aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin a que se destinen". [8]

[7] Davalos Mejía, Carlos. Títulos y Contratos. pag. 326.

[8] IBIDEM.

Para el Doctor Cervantes Ahumada, el fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fiduciario para la realización de un determinado fin. [9]

Nuestro parecer respecto al concepto de fideicomiso no es discordante de la definición que da el legislador, sin embargo, queremos hacer notar que es muy difícil dar una definición general de fideicomiso, ya que la práctica bancaria diaria va haciendo que esta figura evolucione cada vez más hacia combinaciones sumamente complejas.

En México, la palabra fideicomiso no pierde su primitiva acepción de "fides" "comissio" que significa encargo o comisión a alguien a quien se le tiene confianza.

[9] Citado por Olvera de Luna, Omar. **Contratos Mercantiles** pag. 176.

B. ELEMENTOS PERSONALES.

Los elementos personales del fideicomiso en general son, como ya se anotó, el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario, pudiendo ser el propio fideicomitente, fideicomisario al mismo tiempo.

Los fideicomisos que tienen por objeto el uso y usufructo de inmuebles ubicados en una zona vedada constitucionalmente normalmente tienen los siguientes elementos.

En primer lugar, el fideicomitente o fideicomitentes quienes pueden ser personas físicas o morales extranjeras con capacidad general para contratar, quienes destinaran una parte de su patrimonio, generalmente una suma de dinero, para constituir el fideicomiso o bien, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que aporten al fideicomiso un inmueble recibiendo del extranjero directamente una suma de dinero por la afectación.

En segundo lugar, intervendrá la fiduciaria, que no es

otra cosa que una sociedad anónima autorizada para ejercer los servicios fiduciarios por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, de conformidad con lo establecido por la Ley de Instituciones de Credito. [10]

Por último, el tercer elemento lo constituyen los fideicomisarios, quienes serán extranjeros y por lo tanto personas impedidas para adquirir el inmueble cuyo uso adquieren por medio del fideicomiso. Es evidente que los fideicomisarios pueden tener también el caracter de fideicomitentes.

Es nulo el fideicomiso constituido en favor del fiduciario. [art. 348 parte final]

Los fideicomisarios deben tener la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica.

Aparejado con el problema de los elementos personales, se genera el del concurso de voluntades que deben darse en este negocio juridico.

Dedicaremos las siguientes líneas a tratar de esclarecer esa situación.

[10] Vease anexo.

Por principio de cuentas y en relación a los elementos personales antes mencionados, debemos señalar que el negocio fiduciario entre particulares esta prohibido, de conformidad con el articulo 350 que establece en forma terminante que solo pueden ser fiduciarias las instituciones expresamente autorizadas para ello.

Por negocio fiduciario se debe entender aquel que se celebra con alguna persona que actuando como fiduciario no esta autorizado para tal efecto conforme a la ley.

Por lo anterior, entiéndase entonces que el negocio fiduciario no esta permitido, y lo que si se permite es el negocio juridico llamado fideicomiso.

Si bien en los textos romanos se lee con frecuencia el termino "negotium", el significado que se le atribuye no es unico, sino por el contrario, sumamente variado, por tanto resulta dificil concebir que en el Derecho Romano se encuentre siquiera un antecedente de la acepción técnica conferida a dicho vocablo.

En realidad el negocio jurídico nace como una figura técnica, uniforme y básica dentro de la teoría general del acto jurídico, y en este sentido alcanza un gran desarrollo, durante la segunda mitad del siglo XIX, como una manifestación del florecimiento que en esa época tuvo el pandectismo alemán.

Debido a la influencia que han ejercido la legislación y doctrina francesas en nuestro medio, la mayoría de los tratadistas nacionales omiten referirse al negocio jurídico; excepcionalmente algunos coadyuvan a la difusión de la figura negocio jurídico.

Rojina Villegas, por ejemplo, considera muy clara la distinción entre hecho y acto jurídico, reconociendo que los italianos no están de acuerdo con dicha distinción. Rafael De Pina, por su parte, sin exponer el problema, simplemente se dedica a expresar algunos aspectos negativos del mismo, por ejemplo, que el negocio es una especie de un género, llamado acto jurídico, y por lo elemental de su obra, solo alude para no entablar confusiones, fundamentalmente por no existir la diferencia entre acto y negocio dentro del criterio del legislador. Gutierrez y González, simplemente omite cualquier consideración al negocio, concretándose al estudio del hecho y del acto jurídico, Leopoldo Aguilar Carvajal, solo refiere que el

contrato es un negocio jurídico y este a su vez es una especie del acto jurídico, pero no explica nada y Rodolfo Batiza, no solo no se ocupa del asunto sino que considera trivial y estéril tratar de establecer la diferencia entre ambos. [11]

Quienes si han escrito sobre la concepción tripartita de hechos, actos y negocios jurídicos, y en consecuencia han destinado atención a la última de las figuras son Ortiz Urquidi, y Villoro Toranzo. [12]

Para el maestro oaxaqueño, la calificación que deba atribuirse a cierto acontecimiento jurídico, esta condicionada a la intervención de una voluntad, tanto para realizarlo como para crear las consecuencias jurídicas producto de esa realización.

En esas condiciones el hecho jurídico es el acontecimiento en el que no interviene la voluntad humana, ni en su realización ni en la creación de consecuencias, y sin embargo estas se producen; en el acto jurídico la voluntad interviene solo en su realización y no en la creación de consecuencias y, por último, si de un negocio jurídico se trata, la voluntad de su autor o partes, interviene tanto en la realización, como en la creación de consecuencias jurídicas.

[11] Domínguez Martínez, Jorge A. El fideicomiso. pag.33.

[12] ibidem.

Se añade que la característica principal del negocio jurídico es la licitud, dado que las partes deben estar de acuerdo en ambos momentos, y si el acontecimiento jurídico es ilícito, se presupone que las partes no estarán de acuerdo con sus consecuencias, lo que viene a condicionar, por la aceptación o rechazo de las consecuencias, si el acontecimiento es hecho o es acto jurídico.

Ortiz Urquidi nos llama la atención sobre este punto y apunta que, por ejemplo, el homicidio, dada su evidente ilicitud, no podrá ser nunca negocio jurídico por mas que se quieran las consecuencias a el inherentes, bastaría con pensar en privaciones lícitas de vida humana, como puede ser la ejecución de un condenado a muerte o cualquiera causa de licitud o justificación para tratarlas como negocio si sus consecuencias son descadas. [13]

Villoro Toranzo, por su parte, expone sus ideas con mayor apego a la teoría general del negocio jurídico.

Distingue tres especies de actos jurídicas en sentido amplio, los delitos, los actos jurídicas en sentido estricto y los negocios jurídicos.

[13] Idem.

Se añade que la característica principal del negocio jurídico es la licitud, dado que las partes deben estar de acuerdo en ambos momentos, y si el acontecimiento jurídico es ilícito, se presupone que las partes no estarán de acuerdo con sus consecuencias, lo que viene a condicionar, por la aceptación o rechazo de las consecuencias, si el acontecimiento es hecho o es acto jurídico.

Ortiz Urquidi nos llama la atención sobre este punto y apunta que, por ejemplo, el homicidio, dada su evidente ilicitud, no podrá ser nunca negocio jurídico por mas que se quieran las consecuencias a el inherentes, bastaría con pensar en privaciones lícitas de vida humana, como puede ser la ejecución de un condenado a muerte o cualquiera causa de licitud o justificación para tratarlas como negocio si sus consecuencias son deseadas. {13}

Villoro Toranzo, por su parte, expone sus ideas con mayor apego a la teoría general del negocio jurídico.

Distingue tres especies de actos jurídicas en sentido amplio, los delitos, los actos jurídicas en sentido estricto y los negocios jurídicos.

[13] Idem.

La primera especie esta constituida por los delitos que son verdaderos actos jurídicas; la distinción entre las otras dos especies se debe a la doctrina alemana, la cual diferencia a los actos en sentido estricto, de los negocios jurídicas.

Ambos nacen de la intención libre y consciente del hombre, ambos producen consecuencias jurídicas que se imputan a sus autores, pero solo en los negocios jurídicas se encuentra la voluntad deliberada de crear consecuencias jurídicas que obliguen a sus autores. [14]

Una reglamentación tan libre, como la que se efectuó en quince artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que permite una pluralidad de posibilidades y aplicaciones del fideicomiso, permite afirmar, sin duda, que el fideicomiso pertenece a la especie de actos llamada negocio jurídico. [15]

Lo anterior era importante señalarlo en este apartado dedicado a los elementos personales del fideicomiso, ya que las

[14] Villoro Toranzo, M. Introducción al Estudio del Derecho pag. 262.

[15] Cfr. Domínguez Martínez, J. Obra Citada. pag. 34.

partes, al emitir su voluntad para la constitución y realización de los fines del fideicomiso, deben saber las consecuencias que puede acarrear su manifestación de voluntades.

Es de explorado derecho que la voluntad debe externarse, el querer que se mantiene en el fuero interno del sujeto carece de relevancia jurídica [16], en tanto que una manifestación de voluntad desvinculada o cuando menos incongruente con el querer psicológico es una manifestación imperfecta.

Uno de los aspectos mas discutidos por la doctrina mercantil es el relativo a establecer si el fideicomiso es un negocio jurídico unilateral, por quedar constituido por la simple manifestación de voluntad del fideicomitente, o bien, si por el contrario, es plurilateral, al requerir su constitución la presencia de dos manifestaciones volitivas, por lo menos.

En este punto, la doctrina no coincide y se han elaborado varias teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del fideicomiso en orden a las personas que han de manifestar su voluntad.

[16] Voluntas in mente retenta voluntas non est.

Para Cervantes Ahumada, por ejemplo, el fideicomiso es siempre una declaración unilateral de voluntad, debido a que se constituye por la simple declaración de voluntad del fideicomitente, sin que se requiera del concurso de las voluntades del fiduciario, ni del fideicomisario. [17]

Para Rodríguez y Rodríguez, el fideicomiso es normalmente un negocio unilateral, cuando el fideicomitente declara su voluntad; pero admite, por otra parte la posibilidad de que el fideicomiso sea bilateral, cuando en el acto origen del mismo, tanto fideicomitente como fiduciario representan intereses opuestos que se coordinan mediante el encuentro de sus manifestaciones de voluntad. [18]

Para Barrera Graf, el hecho de que el segundo párrafo del artículo 350 permita al fideicomitente constituir o afectar bienes en fideicomiso, sin requerirse la presencia o cooperación de un fiduciario, no implica dejar de estar frente a un contrato y por ende ante un negocio bilateral o sinalagmático, pues conforme lo preceptuado en el párrafo siguiente del propio

[17] Cfr. Títulos y Operaciones de Crédito. pag. 305.

[18] Cfr. Curso de Derecho Mercantil. tomo II pag. 120.

fiduciario, presencia, que no es obligatoria, sino facultativa para una institución fiduciaria determinada. [19]

En virtud de la extraordinaria flexibilidad del fideicomiso, se considera que cada autor tiene razón desde su particular punto de vista.

El fideicomiso, sin embargo es un acto unilateral en su constitución, y un contrato en su ejecución. [20]

En ese acto unilateral constitutivo del fideicomiso el fideicomitente puede abstenerse de designar nominalmente al fiduciario, en tal supuesto, el fideicomisario o el juez competente conforme a la ubicación de los bienes, serán quienes a designen y esta aceptara, en su caso, la designación, sin que intervenga para nada en la creación del acto. [arts. 346 en relación al 350]

Así se explica que el fideicomiso pueda constituirse por testamento, supuesto en el cual, abierta la sucesión, el albacea deberá contratar con la fiduciaria la ejecución del fideicomiso constituido por el de cujus. [arts. 350 y 352 de la propia ley]

[19] Cfr. Instituciones de Derecho Mercantil. pag. 355.
[20] Cfr. Domínguez Martínez, J. Obra Citada, pag. 49.

Así pues, por una parte se encuentra el acto constitutivo del fideicomiso, por el que el fideicomitente afecta unilateralmente ciertos bienes a un fin determinado, y otro, que sigue al primero, el contrato por virtud del cual la institución fiduciaria se obliga a realizar el fin para el que están afectos dichos bienes, a cambio de las compensaciones a que tendrá derecho conforme a la ley.

Con fecha 30 de abril de 1971 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo del Ejecutivo Federal que autoriza el otorgamiento de permisos para que las instituciones fiduciarias constituyan fideicomisos por medio de los cuales se concede a extranjeros el uso de bienes inmuebles ubicados en la faja prohibida, destinados a promover los usos habitacionales, industriales o turísticos, mediante la emisión de certificados de participación inmobiliarios, que representen para los beneficiarios exclusivamente el derecho a la utilización y el aprovechamiento de los inmuebles objeto del fideicomiso, sin transmitirles en ningún caso su propiedad, ni crear a su favor derechos reales, así como el arrendamiento por períodos no superiores a diez años.

C. EL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO.

El aspecto patrimonial del fideicomiso es de gran importancia para comprender su naturaleza jurídica, por lo que al hacer nuestro esquema de trabajo, consideramos muy importante hacer un apartado con este tema, dado que para el fideicomiso que tiene por objeto conceder el uso de inmuebles en la faja prohibida, es necesario determinar a quien corresponde el dominio del patrimonio afectado.

El problema del patrimonio fideicomitado radica en establecer dicha titularidad, ya que como se sabe no puede existir un patrimonio sin una persona que sea su titular.

Para iniciar, es necesario recordar el concepto de patrimonio.

Marcel Planiol define al patrimonio como "un conjunto de derechos y obligaciones apreciables en dinero que pertenecen a una persona y que forman una unidad." [21]

[21] Tratado de Derecho Civil, pag. 23.

De la anterior definición se desprenden necesariamente los siguientes elementos: 1. Solo las personas tienen patrimonio, 2. Toda persona tiene patrimonio, 3. Cada persona tiene un solo patrimonio, 4. El patrimonio es inseparable de la persona.

A lo anterior se le conoce en el mundo del derecho como los elementos de la teoría del patrimonio personalidad.

Algunos autores opinan que la teoría del patrimonio personalidad es artificial, abstracta y estrictamente lógica sin embargo, la crítica más severa que se hace a dicha teoría es la de la indivisibilidad del patrimonio, consistente en que los ordenamientos legales admiten en diversas ocasiones una dualidad transitoria de patrimonios de los que una sola persona es la titular, y lo que es más frecuente, que un sujeto destine o distribuya sus bienes de tal manera que forme dos o más grupos de ellos, los cuales constituyan universalidades jurídicas diferentes.

Existen en nuestro derecho múltiples casos en los que una persona tiene más de un patrimonio, a saber: a. Patrimonio de la familia, b. régimen de sociedad conyugal en el matrimonio, c. el patrimonio de los ausentes e ignorados, d. el hereditario, e. el

del concursado o quebrado, f. la fortuna de mar, y g. el fundo mercantil.

La posibilidad jurídica de que existan varias masas independientes de bienes, cuyo común denominador y carácter distintivo sean su destino a la obtención de ciertos fines económico-jurídicas, es lo que ha dado lugar a que surja una teoría llamada patrimonio-afectación.

El patrimonio entonces se entiende tomando en cuenta el destino que en un momento dado tengan determinados bienes, derechos y obligaciones, con relación a un fin jurídico, gracias al cual se organizan legalmente en forma autónoma. [22]

Seria suficiente con dar lectura a los artículos rectores del fideicomiso en la Ley de Títulos, para comprender que las ideas vertidas en torno al patrimonio afectación son aplicables a la masa fideicomitida. (arts. 346, 349 y 351 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito)

[22] Rojina Villegas, Rafael. Compendio. Tomo II pag. 15.

Consecuentemente los puntos que fundamentan la teoría del patrimonio afectación y los dispositivos rectores del fideicomiso, dan como conclusión que la masa de bienes fideicomitados integran un patrimonio, de ahí el nombre impuesto al presente inciso.

La mas dura critica hecha a la teoría del patrimonio afectación, es la realizada por Antonio de Ibarrola, que establece que todo patrimonio es una universalidad jurídica, pero no toda universalidad jurídica es un patrimonio, se puede concebir perfectamente el patrimonio de una persona dividido en varias masas independientes, sin la necesidad de recurrir a la ficción de que existen varios patrimonios. [23]

En base a la certera critica del maestro de Ibarrola, concluimos que en esencia son verdaderos los postulados de la teoría clásica y por lo tanto, los bienes fideicomitados no integran un patrimonio afectación, por lo que aun queda pendiente determinar a quien pertenecera el dinero o los inmuebles fideicomitados y que se ubican en la franja prohibida.

[23] Cosas y Sucesiones, pag. 41.

Es evidente que por el fideicomiso, el fideicomisario no adquiere la propiedad de los inmuebles ubicados en la franja prohibida, pues los beneficios que para ellos representa el fideicomiso están amparados por los derechos de fideicomisario o por certificados de participación que son títulos que traen incorporado un derecho de crédito.

Existe la opinión generalizada de que la institución fiduciaria es la titular de los bienes fideicomitidos.

En ese sentido opina Cervantes Ahumada cuando escribe "...el fideicomiso es un negocio jurídico por medio del cual el fideicomitente constituye un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fiduciario, para la realización de un fin determinado." [24]

En este punto, la doctrina es uniforme, la institución fiduciaria es la titular de los bienes fideicomitidos, por lo que siendo nacional no habrá problema constitucional, estando la fiduciaria legitimada para intentar todo tipo de acciones tendientes a la conservación de la cosa.

[24] Títulos y Operaciones de Crédito pag. 305

Sin embargo, a pesar de que la institución fiduciaria es la titular del patrimonio fideicomitado, se presenta un problema mas, consistente en determinar a quien transmitirá la propiedad de los inmuebles que se encuentran en la faja prohibida al término del fideicomiso, ya que el extranjero está imposibilitado para recibirla.

Existe la opinión en el sentido de que como el artículo 352 de la ley ordena que para la constitución del fideicomiso deben observarse las mismas formalidades que establece la ley común para la transmisión de los bienes, es de entenderse que el fideicomiso implica precisamente una transmisión de propiedad en favor del fiduciario.

De conformidad con el artículo 349 de la ley, el fideicomiso implica una afectación de bienes, que no es otra cosa que darles un destino, lícito, permitido y regulado por la ley, sin que implique que los bienes salgan de la esfera patrimonial del fideicomitente.

En el caso de los fideicomisos relativos a inmuebles en la zona prohibida, la propiedad de dichos bienes en ningún caso puede rehacer en un fideicomitente extranjero, lo que sucede aquí

es que el fideicomitente destina una parte de dinero de su patrimonio a efecto de que la fiduciaria compre los inmuebles con el fin de que se destine al fideicomiso y concluido éste, tiene derecho a recibir el producto que se obtenga por su venta.

En todo caso, el fideicomitente extranjero es propietario de la suma de dinero.

Cuando el fideicomitente es el Estado o bien una persona física o moral nacional, no existe problema por no contravenirse el mandato constitucional, en este caso la fiduciaria puede revertirles la propiedad.

D. FIDEICOMISOS PROHIBIDOS.

Las prohibiciones en el fideicomiso derivan directamente del artículo 359 que establece que quedan prohibidos los fideicomisos secretos, aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que deban substituirse por la muerte de la anterior, salvo el caso de que la sustitución se realice a favor de personas que estén nacidas o concebidas ya a la muerte del fideicomitente, aquellos cuya duración sea mayor de treinta años cuando se designe como beneficiario a una persona jurídica que no sea de orden público, o institución de beneficencia, sin embargo pueden constituirse con duración mayor cuando el fin sea el mantenimiento de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro.

Lo anterior, aplicado al fideicomiso con inmuebles en franja prohibida resulta aplicable de la siguiente manera.

En primer lugar, de acuerdo a la fracción I del citado artículo, quedan prohibidos los fideicomisos secretos, que, en el caso de estudio, toda vez que el objeto del mismo es la explotación de inmuebles para diversos fines, deberá el contrato

D. FIDEICOMISOS PROHIBIDOS.

Las prohibiciones en el fideicomiso derivan directamente del artículo 359 que establece que quedan prohibidos los fideicomisos secretos, aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que deban substituirse por la muerte de la anterior, salvo el caso de que la sustitución se realice a favor de personas que estén nacidas o concebidas ya a la muerte del fideicomitente, aquellos cuya duración sea mayor de treinta años cuando se designe como beneficiario a una persona jurídica que no sea de orden público, o institución de beneficencia, sin embargo pueden constituirse con duración mayor cuando el fin sea el mantenimiento de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro.

Lo anterior, aplicado al fideicomiso con inmuebles en franja prohibida resulta aplicable de la siguiente manera.

En primer lugar, de acuerdo a la fracción I del citado artículo, quedan prohibidos los fideicomisos secretos, que, en el caso de estudio, toda vez que el objeto del mismo es la explotación de inmuebles para diversos fines, deberá el contrato

de ejecución del fideicomiso, elevarse a escritura pública y registrarse la operación en el registro público de la propiedad del lugar donde se encuentren ubicados los inmuebles que se compren para tal efecto, quedando en esta situación anulada la posibilidad de que el fideicomiso sea secreto o que no tenga la publicidad debida.

Secreto sería el caso ya conocido de que un prestanombres con capacidad para adquirir el dominio de inmuebles en la zona prohibida, efectuará dicha operación de simulación, como acontece frecuentemente con las casas propiedad de extranjeros en los principales destinos turísticos del país.

Sin embargo, lo anterior no cae en la regulación jurídica del fideicomiso.

La fracción segunda del artículo anteriormente invocado se aplica generalmente a todos los fideicomisos, independientemente de su finalidad u objeto.

Es de plena aplicación al caso de los fideicomisos con inmuebles en zona prohibida.

Respecto de la tercera fracción, cabría preguntarse si la

actividad turística debe considerarse de orden publico por que en caso afirmativo, tendríamos la posibilidad jurídica de constituir fideicomisos en la franja reservada, con inmuebles destinados a ser ocupados y explotados por extranjeros.

No dudamos que debido a la importancia económica de la actividad turística, lo anterior sea posible, sin embargo no tenemos conocimiento de que se halla celebrado una operación de este tipo con una duración mayor a 30 años.

Quando en la celebración de un negocio jurídico como el fideicomiso se carece de la voluntad para celebrarlo de las formalidades requeridas, o si su objeto, motivo, condición son ilícitos, esta figura caerá en la invalidez, cabe recordar que la invalidez puede ser de tres diversos grados que serían los siguientes| 1. Inexistencia, por faltarle alguno de sus elementos esenciales, ya sea la manifestación de voluntad o el consentimiento, el objeto al ser jurídicamente imposible el directo, o bien física o jurídicamente imposible el indirecto, o bien la solemnidad, si se trata de un negocio solemne. 2. Nulidad absoluta, si aquel contraria disposiciones de orden publico o buenas costumbres, y 3. Nulidad relativa, cuando se lesionan intereses particulares.

Otros autores opinan que solo existe la nulidad absoluta y relativa.

Estará afectado de nulidad absoluta todo aquel fideicomiso que carezca en su celebración de algún elemento esencial de los que requiere para su estructura, pues ello significa en suma que su objeto es contrario a las leyes de orden publico, salvo los casos de excepción y los fideicomisos de interés publico.

La ley no puede determinar que un acto ilícito produzca efecto alguno, ni siquiera efectos provisionales. [25]

[25] Cfr. Rojina Villegas, R. Obras Citada, pag. 134.

E. EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO.

La duración del fideicomiso puede prolongarse mas allá de la vida del fideicomitente, pero no mas allá de la del fideicomisario, salvo el caso de que el fideicomiso sea constituido por tiempo fijo, o bien consista en una cosa específica, como puede ser la entrega de un bien a los herederos en el momento del fallecimiento del beneficiario.

Se afirma que tratándose de un fideicomiso, su realización se agota por una sola vez, como puede ser el caso de un fideicomiso constituido para el pago de una deuda, para la liquidación de un concurso o una quiebra, para la explotación de cierta empresa, etc., extinguiéndose al alcanzar el objetivo planteado.

Sin embargo, la practica exige que algunos de los fideicomisos efectúen operaciones periódicas, como sucede en el pago de pensiones alimenticias, o cuando se administran inmuebles, razón por la cual el fiduciario tiene que realizar todos los actos necesarios y tendientes a la conservación del

patrimonio fideicomitido; en estos casos el fideicomiso se agota cuando concluya el termino que se le ha fijado, pudiendo incluirse en esta posibilidad, que el termino se determine por el fallecimiento del beneficiario.

Las causas de extinción del fideicomiso se encuentran planteadas en el articulo 357, mismas que pueden provenir de actos o hechos juridicas y son a saber: 1. Por la realización del fin para el que fue constituido, 2. Por hacerse este imposible, tanto física como juridicamente, 3. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa, o por no haberse verificado esta dentro del plazo señalado al constituirse el fideicomiso, o en su defecto dentro del de 20 años siguientes a la fecha de su constitución, 4. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto, 5. Por convenio expreso entre el fideicomitente y fideicomisario, 6. Por revocación que haga el fideicomitente, siempre y cuando se haya reservado este derecho al constituir el fideicomiso, y 7. En el caso del párrafo final del articulo 350, el cual se refiere a el caso de renuncia del fiduciario y que siendo imposible su substitución, el juez competente y con conocimiento del asunto, podrá declararlo extinguido.

La extinción del fideicomiso, en especial la extinción del

que es materia de este trabajo, produce efectos jurídicas, consistentes en la restitución o venta del patrimonio fideicomitado, ya sea a el fideicomitente, al fideicomisario o a sus herederos, según sea el destino final que se haya planteado al constituirlo.

Es evidente que no se pueden transmitir los inmuebles ubicados en zona prohibida a los extranjeros.

Con esa salvedad, el producto obtenido por la venta de los bienes objeto del fideicomiso, seguido de la extinción, deberá revertirse al fideicomitente, al fideicomisario o a sus herederos, observando previamente las formalidades que establece la ley para la transmisión de los bienes, como se constituyo y haciendo las inscripciones en el Registro Publico. [26]

[26] CFR. Davalos Mejia, Carlos. Obra Citada, pag. 446.

C A P I T U L O T E R C E R O

A. PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL.

Concluiremos este trabajo con algunos comentarios sobre la importancia jurídica y económica de la institución del fideicomiso.

La falta de datos estadísticos, y aun la abierta oposición para proporcionar los correspondientes al número e importancia de fideicomisos tanto del sector público, como del privado nos impiden destacar lo que nosotros suponemos que es concluyente respecto de esta figura, sin embargo, expondremos algunas ideas sobre el manejo a que están sujetos.

Aunque vivimos una época de cambio en los bancos, que antes eran Sociedades Nacionales de Crédito, con un 66% de su capital en poder del estado, porción imprescriptible, inalienable e inembargable, en la actualidad los bancos, en virtud de la nueva ley de Instituciones de Crédito que se anexa al final de este trabajo, se convierten en Sociedades Anónimas y se desincorporan del sector oficial de la economía.

El fideicomiso fue una figura inclusive sujeta a un uso abusivo por parte del Estado, en una etapa histórica aun no muy lejana; hubo y hay fideicomisos para la garantía y fomento del turismo, para la pequeña y mediana industria, para el fomento ejidal de plantas industriales, para la instalación y adquisición de estaciones de radio y televisión rural, para el Programa Nacional Fronterizo, para el fomento de la región X o Z, para la creación de conjuntos urbanos, para la creación de caminos y puentes, para la eliminación y cobertura de riesgos cambiarios, para la inversión del dinero de los particulares, en la llamada cuenta maestra, para la introducción de agua potable y drenaje, para la agricultura, para la ganadería, para el fomento de la industria maquiladora, para el aumento en la producción de leche, en fin, en todos los ángulos o facetas en que se le ocurra al estado que puede reforzar, sostener, estimular, impulsar, suplir o crear iniciativa privada.

El Banco de México y Nacional Financiera son los organismos preferidos por el estado para la constitución de sus fideicomisos, sin embargo, en la época en que el estado era el único propietario de los bancos, no fue desconocido que debido a la mala política financiera, una institución que ocupó el liderazgo bancario por años, pasó a segundo término y pronto será desincorporada del sector público.

En apoyo a lo anterior, el maestro Pablo Macedo hace un comentario en relación a el abuso de que ha sido objeto la institución en estudio por parte del Estado. [27]

Recuerda el maestro que por acuerdo presidencial de 30 de octubre de 1974, se ordeno la creación de un fideicomiso para mejorar, ampliar y desarrollar técnicas de exploración, explotación y comercialización de minerales no metálicos, así como mármoles, granitos y ónix, proponer asesoría técnica para la organización de los concesionarios de yacimientos, promover la instalación de empresas industrializadoras de productos, promover estudios de procesos, otorgar créditos para financiar las actividades mencionadas anteriormente, que el patrimonio del mismo se integró con una aportación inicial de 350 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, sin que se sepa a cuanto puede llegar, o cuantas exhibiciones posteriores se harían, sin que a la fecha tales finalidades se hayan cumplido cabalmente.

Los fideicomisos del estado, sirven para todo y en ellos se manejan todos los fondos que se estiman necesarios.

[27] Cfr. Lepaulle, Pierre. Obra Citada, pag. LI.

Asimismo refiere el maestro Macedo, que existían por el año de 1974, 509 fideicomisos constituidos por el Estado, con objetivos de carácter "cultural", con aportaciones por parte del Gobierno federal, del orden de Dieciocho mil millones de pesos, del año 1974. [28]

Volviendo al tema que nos ocupa, no podemos soslayar la importancia industrial y comercial del fideicomiso con inmuebles en franja prohibida, ya que precisamente, las costas y las fronteras, principalmente la frontera norte, son polos de un gran atractivo para los inversionistas extranjeros, quienes ven en nuestro país un territorio propicio para explotar variados giros industriales o comerciales, en ese orden de ideas, a ellos les interesa instalarse en estas zonas, y en virtud de la prohibición constitucional, la primera alternativa que tienen es el arrendamiento, sin embargo los costos financieros de tal operación son demasiado altos, por lo que invariablemente optarán por servirse de los fideicomisos creados tanto por el sector público, como por el privado.

[28] Ibidem.

B. PARA DESARROLLOS HABITACIONALES O TURISTICOS.

Sin duda, el fideicomiso habitacional o turístico, es dentro de los que operan con inmuebles en franja prohibida uno de los que mas aceptación tiene por parte de los inversionistas extranjeros.

Este tipo de fideicomiso, amén de permitir que los extranjeros se instalen legalmente en la franja, tiene como finalidad fomentar el desarrollo de determinada región y con ello el del país entero.

En este tipo de fideicomisos, el fideicomisario, quien es extranjero, normalmente fingirá como depositario del inmueble y podrá habitarlo y usarlo en su beneficio.

En materia de fideicomiso turístico o para desarrollos habitacionales encontramos el siguiente marco jurídico:

En primer lugar hemos de referirnos al decreto publicado, con fecha 27 de noviembre de 1937, firmado por el Presidente de

la República, General Lazaro Cárdenas, quien con la intención de propiciar el mejoramiento de las franjas prohibidas autorizó la creación de industrias hoteleras y de turismo, así como permitió poseer predios a los extranjeros que lo hicieran en forma pacífica, aunque obviamente sin poder prescribirlos, también se autorizó el uso y usufructo de inmuebles urbanos con fines residenciales.

Dicho acuerdo establecía que en los permisos solicitados, correspondía a la fiduciaria otorgar los datos de identificación del extranjero, reservándose la Secretaría de Relaciones Exteriores, el derecho de conceder o negar el permiso, quedando establecido que en caso de otorgarse, dicho permiso tendría una vigencia máxima de 25 años, para el cumplimiento exacto de tal disposición, la Secretaría debería llevar un registro de tales permisos, en caso de que se extinguiera dicho termino y el extranjero continuara en posesión la Procuraduría General de la República debería intervenir para exigir la cancelación del permiso.

Con fecha 1 de julio de 1942, se publico un decreto declarando la suspensión de las garantías individuales en toda la República y autorizando al Ejecutivo para legislar basado en el estado de emergencia.

Con fecha 29 de junio de 1944, se publico un decreto en el Diario Oficial de la Federación, suscrito por el Presidente Manuel Avila Camacho, basado en el estado de emergencia que existia en el país y fundándose en que el capital extranjero podía invertirse en adquisiciones y acaparamiento de inmuebles, tanto rústicos como industriales y comerciales en perjuicio de la distribución de la riqueza, acordó someter a un otorgamiento de permiso previo, a todas las adquisiciones de inmuebles por extranjeros, personas físicas o morales, e inclusive sociedades mexicanas con capital extranjero.

La exigencia del permiso se extendía aun a las adquisiciones que se efectuaran con inmuebles fuera de la franja prohibida.

Asimismo se decretaba la imposición de la pena privativa de la libertad, de seis meses a tres años o multa de ciento cincuenta mil pesos, en los casos de ocultación de la calidad de extranjeros por falsas declaraciones o interposita persona, también se prohibió el arrendamiento por mas de 10 años, así también los fideicomisos en los que el fideicomisario fuera extranjero, o sociedad mexicana con capital extranjero.

También este decreto sujeto al requisito de permiso previo, otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, en los casos de constitución de sociedades mexicanas.

Con fecha 23 de junio de 1947 se creo una comision mixta intersecretarial, con la finalidad de unificar criterio en torno a la aplicación de los artículos 2, 87 y 88 de la Ley General de Población, artículo 27 fracción I de la Constitución, el decreto de fecha 29 de junio de 1944 y el articulo 251 de la Ley general de Sociedades Mercantiles.

Con fecha 30 de abril de 1971, se publico en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo, con la finalidad de fomentar el desarrollo en las franjas prohibidas, suscrito por el Presidente Luis Echeverria.

Este decreto faculta a la secretaria de Relaciones Exteriores para conceder permisos a las instituciones de crédito ara adquirir bienes inmuebles destinados en fideicomiso con fines industriales, comerciales y turisticos en las fronteras y costas, zonas a las que alude el articulo 27 fracción I de la Constitución, asi como permitir a los extranjeros su uso y aprovechamiento durante un plazo máximo de treinta años, siempre y cuando la institución fiduciaria conserve la propiedad de los

inmuebles durante la vigencia del fideicomiso. Los extranjeros podrán ser titulares de certificados de participación inmobiliaria, representativos de los derechos que tienen sus tenedores respecto a los inmuebles sobre los que son emitidos.

En virtud de este decreto, el gobierno federal se reserva el derecho de inspeccionar y verificar, en cualquier tiempo el cumplimiento exacto de los fines del fideicomiso.

El acuerdo del 30 de abril de 1971 es el producto del reconocimiento oficial de una necesidad calificada por algunos como desesperada, en el desarrollo económico de las fajas fronterizas y costas, misma que consiste en crear nuevas fuentes de trabajo, en arraigar a los nativos en sus necesidades y en su lugar de origen, ayudando a establecer nuevas y prosperas poblaciones que impulsen el crecimiento del país en su conjunto, que justifiquen el establecimiento de centros de desarrollo como escuelas y universidades, para a final de cuentas, tratar de evitar el centralismo que caracteriza a nuestro país.

La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 9 de marzo de 1973, estableció un Registro Nacional de Inversionistas Extranjeros, cuya función es dar publicidad a

los actos relativos a esta materia y recabar y ofrecer información de las inversiones hechas en nuestro país.

El artículo 23 fracción III de dicho ordenamiento establece la necesidad de inscribir los fideicomisos en que participen extranjeros.

El reglamento de esa ley establece en términos concretos la manera en que debe proporcionarse la información a inscribirse.

Las instituciones fiduciarias tienen la obligación de inscribir los fideicomisos en los que participen o se deriven beneficios para extranjeros, dentro del mes siguiente a la fecha de constitución del fideicomiso.

No es un obstáculo lo anteriormente señalado, para que se protocolice la escritura constitutiva o se inscriba en el registro público de la propiedad.

Los artículos 23 y 24 del reglamento de la ley de Inversiones, establecen los requisitos que debe tener la solicitud de inscripción o de modificación de los términos de la inscripción.

Las inscripciones, modificaciones o cancelaciones, se harán previo acuerdo del Director del Registro; una vez hecha la inscripción podrá expedirse constancia a las personas con interés jurídico en obtenerla.

El Director del Registro de Inversiones Extranjeras esta facultado por la ley para cerciorarse de la veracidad de las solicitudes presentadas asi como exigir la información que considere necesaria.

C. PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA.

A consecuencia de la suspensión de garantías decretada en nuestro país, por el estado de guerra en que nos encontrábamos con alemania, Italia y Japón en 1942, el Ejecutivo Federal obtuvo autorización para legislar en distintas ramas de la administración publica, por lo anterior, en 1944 como ya se menciona, se publico un decreto que establecia que mientras estuviera en vigor la suspensión, los extranjeros y las sociedades mexicanas solo podrian desarrollar determinadas inversiones en el pais, previo permiso que otorgaba la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Con el permiso aludido, se podia 1. Adquirir bienes, negociaciones y o empresas, o el control sobre ellas, que se dediquen a cualquier giro comercial o actividad industrial, o de explotación con cualquier fin, Inmuebles rústicos y urbanos, asi como sus fraccionamientos, 2. Arrendar por mas de 10 años, y 3. Adquirir el dominio de tierras y aguas a que se refiere la fracción I del articulo 27 de la Constitución, con las limitaciones que el mismo establece.

En la actualidad, la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, establecen las atribuciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores en materia de permisos que se otorgan para constituir fideicomisos, cuyos inmuebles se destinen al establecimiento de industrias maquiladoras.

Tomando en consideración las condiciones económicas de nuestro vecino del norte, fácilmente se saca la conclusión de que la mano de obra en nuestro país es mucho más barata que allende la frontera.

Por lo anterior, el establecimiento de industria maquiladora, principalmente en la frontera norte del país ha tenido una gran expansión en la última década, debido a las indudables ventajas financieras que representa para las industrias extranjeras.

Aquí es aplicable la mayor parte de lo dicho para el fideicomiso turístico. Pero, si a la posibilidad de que se facilite el uso de inmuebles, se le añade el hecho de obtener

crédito barato, además de algunos estímulos fiscales, entonces no nos extraña dicho auge.

En esta materia, aun hace falta tiempo para tener una reglamentación completa y adecuada, no solo en lo que se refiere al fideicomiso, sino en todo lo que puede abarcar el complejo fenómeno económico de la industria maquiladora en la frontera.

A N E X O

LE Y D E I N S T I T U C I O N E S D E C R E D I T O

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

LEY de Instituciones de Crédito.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, salud:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido darme el siguiente

DECRETO

"EL H. CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

TITULO PRIMERO

De las Disposiciones Preliminares

ARTICULO 1o.—La presente Ley tiene por objeto regular el tráfico de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; sus actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.

ARTICULO 2o.—El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

- I. Instituciones de banca múltiple, y
- II. Instituciones de banca de desarrollo.

Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasiva directa o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que los sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentran debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público resolverá las consultas que al respecto se le formulen y podrá establecer criterios de aplicación general conforme a los cuales, para efectos de la presente Ley, se precise si hay o no intermediación bancaria.

ARTICULO 3o.—El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los Intercomités públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, así como aquellas que para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al Banco de México, con tal carácter se constituyan.

ARTICULO 4o.—El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que este oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basada en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio sistema, con apego a unas prácticas y usos bancarios.

Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de estas, en las respectivas leyes orgánicas.

ARTICULO 5o.—El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley.

ARTICULO 6o.—En lo no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden siguiente:

- I. La legislación mercantil;
- II. Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y
- III. El Código Civil para el Distrito Federal.

Las instituciones de banca de desarrollo, se regirán por su respectiva ley orgánica y, en su defecto, por lo dispuesto en este artículo.

ARTICULO 7o.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, el establecimiento en el territorio nacional de oficinas de representación de entidades financieras del exterior. Estas oficinas no podrán realizar en el mercado nacional ninguna actividad de intermediación financiera que requiera de autorización por parte del Gobierno Federal, y por tanto se abstendrán de actuar, directamente o a través de interposición persona, en operaciones de captación de recursos del público, ya sea por cuenta propia o ajena, y de proporcionar información o hacer gestión o tramite alguno para este tipo de operaciones.

Las actividades que realicen las oficinas de representación se sujetarán a las reglas que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a las orientaciones que de acuerdo con la política financiera establezca la propia Secretaría y el Banco de México.

La propia Secretaría podrá autorizar el establecimiento en la República de sucursales de bancos extranjeros de primer orden, cuyas operaciones escritas y pólizas podrán efectuarse exclusivamente con residentes fuera del país.

El establecimiento de las mencionadas sucursales se sujetará a las reglas de carácter general que dicta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las operaciones que a éstas autorice la propia Dependencia se sujetarán a las disposiciones que emita el Banco de México.

Los bancos extranjeros de referencia, sin perjuicio de la obligación de responder ilimitadamente con todos sus bienes por las operaciones que practiquen en la República, mantendrán afecto a las sucursales citadas el capital mínimo que determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los usos internacionales relativos a esas operaciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá declarar la revocación de las autorizaciones correspondientes, cuando las referidas sucursales y oficinas no se ajusten a las disposiciones a que se refiere este artículo, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en la presente Ley y en los demás ordenamientos legales.

Al ejercer las atribuciones que le confiere este artículo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria.

Las oficinas y sucursales se sujetarán a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria, y cubrirán las cuotas que por estos conceptos determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TÍTULO SEGUNDO

De las Instituciones de Crédito

CAPÍTULO I

De las Instituciones de Banca Múltiple

ARTÍCULO 8o.—Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar dicho reconocimiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.

Las autorizaciones que al efecto se otorguen, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de am-

pla circulación del domicilio social de la institución de que se trata.

ARTÍCULO 9o.—Sólo gozarán de autorización las sociedades anónimas de capital fijo, organizadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no esté previsto en esta Ley y, particularmente, con lo siguiente:

I. Tendrán por objeto la prestación del servicio de banca y crédito, en los términos de la presente Ley;

II. La duración de la sociedad será indefinida;

III. Deberán contar con el capital social y el capital mínimo que corresponda conforme a lo previsto en esta Ley; y

IV. Su domicilio social estará en el territorio nacional.

La escritura constitutiva y cualquier modificación de la misma, deberá ser sometida a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobadas la escritura o sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial. §

ARTÍCULO 10.—Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple deberán acompañarse de lo siguiente:

I. Proyecto de estatutos de la sociedad en el que deberá contemplarse lo previsto por el último párrafo de la fracción II del artículo 122 de esta Ley, y relación de los socios, indicando el capital que suscribirán, así como de probables consejeros y directivos;

II. Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprenda por lo menos:

a) Los programas de captación de recursos y de otorgamiento de créditos en los que se definan las políticas de diversificación de operaciones pasivas y activas, así como los segmentos del mercado que preferentemente atenderán;

b) Las provisiones de cobertura geográfica;

c) Las bases para aplicar utilidades, en la inteligencia de que las sociedades a las que se autorice a operar como instituciones de banca múltiple, no podrán repartir dividendos, durante sus tres primeros ejercicios, debiendo aplicarse las utilidades netas a reservas; y

d) Las bases relativas a su organización y control interno;

III. Comprobante de depósito, de moneda nacional constituido en institución de crédito o de valores gubernamentales por su valor de mercado, a favor de la Tesorería de la Federación por una cantidad igual al diez por ciento del capital mínimo con que deba operar la sociedad conforme a la presente Ley, y

IV. La demás documentación e información que

a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se requiera para el efecto.

En los casos de revocación a que se refieren las fracciones I y II del artículo 28 de esta Ley, se hará efectiva la garantía por el impuesto original del depósito mencionado en la fracción III de este artículo.

En los supuestos de que se niegue la autorización, se desista el interesado o se inician operaciones en los términos previstos en esta Ley, se devolverá al solicitante el principal y accesorios del depósito a que se refiere la citada fracción III.

Al ejercer las facultades que le confiere este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sujeción a lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, promoverá una adecuada descentralización del Sistema Bancario Mexicano, evitando una excesiva concentración de instituciones de crédito en una misma región, así como preservando el control de la banca mexicana en manos de mexicanos.

ARTÍCULO 11.—El capital social de las instituciones de banca múltiple se integrará por las siguientes series de acciones:

I.—La serie "A", que en todo momento representará el cincuenta y uno por ciento del capital de la institución;

II.—La serie "B", que podrá representar hasta el cuarenta y nueve por ciento del capital de la institución, y

III.—La serie "C", que en su caso podrá representar hasta el treinta por ciento del capital de la institución. Para la emisión de las acciones de esta serie se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 12.—Las acciones serán de igual valor; dentro de cada serie, conferirán a sus titulares los mismos derechos, y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de suscribirse. Las mencionadas acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, quienes en ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares.

Las instituciones podrán emitir acciones no suscritas, que conservarán en tesorería y que serán entregadas a los suscriptores contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso fije la institución.

ARTÍCULO 13.—Las acciones representativas de la serie "A" únicamente podrán ser adquiridas por:

I.—Personas físicas mexicanas;

II.—El Gobierno Federal, las instituciones de banca de desarrollo y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y

III.—Las sociedades controladoras a que se refiere la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

ARTÍCULO 14.—Las acciones representativas de

la serie "B" solamente podrán ser adquiridas por:

I.—Las personas a que se refiere el artículo anterior;

II.—Otras personas morales mexicanas, en cuyos estatutos figure cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros, y;

III.—Instituciones de seguros y de fianzas, como inversión de sus reservas técnicas y para fluctuaciones de valores; sociedades de inversión; fondos de pensiones o jubilaciones de personal, complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, que cumplen con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los demás inversionistas institucionales que autorice expresamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Valores.

ARTÍCULO 15.—Las acciones representativas de la serie "C" solo podrán ser adquiridas por:

I.—Las personas a que se refiere el artículo anterior;

II.—Las demás personas morales mexicanas, y

III.—Personas físicas o morales extranjeras que no tengan el carácter de gobiernos o dependencias oficiales.

ARTÍCULO 16.—Las personas que acudan en representación de los accionistas a las asambleas de la institución, deberán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia institución, que reúna los requisitos siguientes:

I.—Deberán contener de manera notoria, la denominación de la propia institución, así como las instrucciones del otorgante para el ejercicio del poder;

II.—Estarán fechadas y firmadas por el secretario o prosecretario del consejo de administración con anterioridad a su entrega, y

III.—Contendrán la respectiva orden del día, no pudiendo incluirse bajo el nombre de asuntos generales, los puntos a que se refieren los artículos 181 y 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni el relativo a la designación o remoción del director general.

La institución deberá tener a disposición de los representantes de los accionistas los formularios de los poderes, durante el plazo a que se refiere el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de que aquéllos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representantes.

Los escrutadores estarán obligados a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en este artículo e informar sobre ello a la asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva.

ARTÍCULO 17.—Ninguna persona física o moral podrá adquirir directamente o a través de interpusito

persona, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones por más de cinco por ciento del capital pagado de una institución de banca múltiple. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, cuando a su juicio se justifique, un porcentaje mayor, sin exceder en caso alguno del diez por ciento.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a:

I. El Gobierno Federal;

II. Los inversionistas institucionales, señalados en la fracción III del artículo 14 de esta Ley, siempre y cuando su inversión no exceda en lo individual del quince por ciento del capital de la institución emisora;

III. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro;

IV. Las sociedades controladoras a que se refiere la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;

V. Los accionistas de instituciones de banca múltiple que adquirieron acciones conforme a lo previsto en programas aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conducentes a la fusión de dichas instituciones, a quienes la mencionada Secretaría podrá otorgarlas excepcionalmente la autorización relativa, por un plazo no mayor de dos años, sin que la participación total de cada uno de ellos exceda del veinte por ciento del capital pagado, de la institución de que se trate, y

VI. Las instituciones de banca múltiple, cuando adquirieron acciones por cuenta propia conforme a lo previsto en programas aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conducentes a la fusión de las mismas.

Los mencionados límites se aplicarán, asimismo, a la adquisición del control por parte de personas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere para estos efectos como una sola persona.

ARTICULO 18.—La institución se abstendrá de inscribir en el registro de sus acciones las transmisiones que se efectúen en contravención de lo dispuesto por los artículos 13, 14, 15 y 17 de esta Ley, debiendo rechazar su inscripción o informar sobre la transmisión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cinco días hábiles siguientes al que lo conozca.

Las personas que contravengan lo previsto en los artículos señalados en el párrafo anterior, serán sancionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual oyendo previamente al interesado, determinará en su caso, que se vendan a la propia institución las acciones que excedan de los límites fijados al cincuenta por ciento del monto de los valores siguientes:

I. El valor en libros de dichas acciones, según el último estado financiero aprobado al efecto por el

consejo de administración y revisado por la Comisión Nacional Bancaria, y

II. El valor de mercado de esas acciones.

La mencionada venta deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que así lo requiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el beneficio que se obtenga, será entregado por la institución al Gobierno Federal.

Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que conforme a ésta u otras leyes fueren aplicables.

Las acciones así reembolsadas deberán convertirse en acciones de tesorería.

ARTICULO 19.—El capital mínimo de cada una de las instituciones de banca múltiple será la cantidad equivalente al 0.5 por ciento de la suma del capital pagado y reservas de capital que alcancen en su conjunto dichas instituciones al 31 de diciembre del año inmediato anterior.

En el transcurso del primer trimestre de cada año la Comisión Nacional Bancaria dará a conocer el monto del capital mínimo con el que deberán contar las instituciones, a más tardar el último día hábil de año de que se trate. Excepcionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ampliar este plazo en casos individuales, tomando en cuenta la situación económica tanto de la institución respectiva como de la región en que opere.

El capital mínimo deberá estar íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo, deberá estar pagado por lo menos en un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea inferior al mínimo establecido.

Cuando una institución de banca múltiple anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.

Las instituciones de banca múltiple sólo estarán obligadas a constituir las reservas de capital previstas en la presente Ley y en las disposiciones administrativas expedidas con base en la misma.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los casos y condiciones en que las instituciones de banca múltiple podrán adquirir tradicionalmente las acciones representativas de su capital.

ARTICULO 20.—Las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria, en materia de elaboración y aprobación de sus presupuestos anuales, o como de administración de sueldos y prestaciones, o demás materias objeto de regulación, sólo se sujetarán a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las instituciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán efectuar con recursos propios adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de bienes

muebles e inmuebles, así como realizar obras y contratar servicios, por medio de concursos en los que invite cuando menos a tres proveedores, contratistas u oferentes, a mediante adjudicaciones directas previa aprobación en cada caso del consejo de administración. Sin perjuicio de otros requisitos que establezca el propio consejo, en los concursos deberá observarse el siguiente procedimiento: las propuestas se presentarán en sobre cerrado y en fecha, hora y lugar previamente determinados; serán consideradas y resueltas por un comité en el que participe el funcionario responsable de la contabilidad interna, y deberán adjudicarse a favor de quien presente la propuesta más favorable a la institución a juicio de dicho órgano colegiado, atendiendo a criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

A los consejeros de estas instituciones les será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 41 de esta Ley.

ARTICULO 21.—La administración de las instituciones de banca múltiple estará encomendada a un consejo de administración y a un director general, en sus respectivos esferas de competencia.

ARTICULO 22.—El consejo de administración estará integrado, a elección de los accionistas de la sociedad, por once o veintidós consejeros, o por múltiplos de once.

En el primer caso, los accionistas de la serie "A" designarán a seis consejeros. Los de la serie "B" hasta cinco y, los de la serie "C", por cada diez por ciento del capital pagado correspondiente a esta serie, podrán nombrar a un consejero.

En el segundo caso, los accionistas de la serie "A" designarán a doce miembros. Los de la serie "B" hasta diez y, los de la serie "C", por cada cinco por ciento del capital pagado correspondiente a esta serie, podrán nombrar a un consejero.

Los accionistas de cada una de las series, que representen cuando menos un diez o un cinco por ciento del capital pagado de la institución, tendrán derecho a designar un consejero de la serie que corresponda, según se trate de consejos de administración integrados por once o por veintidós miembros, respectivamente. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

En el supuesto de los consejos que se integren por múltiplos de once, así como en los casos previstos en el párrafo anterior y en los artículos 23 fracción II, 73 y 75 de esta ley, se deben guardar las proporciones correspondientes conforme a lo dispuesto en este artículo.

El Presidente del consejo deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "A", y tendrá voto de calidad en caso de empate. Por cada propietario se nombrará un suplente.

ARTICULO 23.—Los nombramientos de consejeros de las instituciones de banca múltiple deberán re-

caer en personas con reconocida honorabilidad que cuenten con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera o administrativa.

En ningún caso podrán ser consejeros:

I. Los funcionarios y empleados de la sociedad con excepción del director general de la misma.

II. El cónyuge. Las personas que tengan parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o civil, con más de uno o dos consejeros según se trate de consejos de administración integrados por once o por veintidós miembros, respectivamente;

III. Las personas que tengan litigio pendiente con la institución de que se trate;

IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio para desempeñar un empleo, cargo o comisión en servicio público, o en el sistema financiero mexicano;

V. Los quebrados y concursados que no hayan sido rehabilitados;

VI. Quienes realicen funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de crédito, y

VII. Quienes realicen funciones de regulación de las instituciones de crédito, salvo que exista participación del Gobierno Federal en el capital de las mismas.

Los consejeros que representen a las series "A" y "B" deberán ser mexicanos o extranjeros que tengan el carácter de inmigrantes residentes en el país.

ARTICULO 24.—El nombramiento de director general de la institución de banca múltiple, deberá recaer en persona que sea de reconocida calidad nacional y que además reúna los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. Haber prestado por lo menos cinco años servicios en puestos de alto nivel directivo, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa;

III. No tener alguna de los impedimentos que para ser consejero señalan las fracciones III a VI del artículo anterior, y

IV. No estar realizando funciones de regulación de las instituciones de crédito.

Los funcionarios que ocupen cargos con las jerarquías inferiores a la del director general, deberán cumplir los requisitos previstos en las fracciones a IV anteriores.

El nombramiento de los consejeros, comisarios del director general y de los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la aquél, requerirá aprobación de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria, la que en ejercicio de esta facultad, procurará evitar que se presenten fenómenos de concentración indebida o inconveniente para el sistema.

ARTICULO 25.—La Comisión Nacional Ban-

ria, con acuerdo de su Junta de Gobierno, oyendo previamente al interesado y a la institución de banca múltiple, podrá en todo tiempo determinar que se proceda a la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisionados, directores y gerentes, delegados habilitados y funcionarios que puedan obstar con su fama a la institución; cuando conculcare que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, o no reúnan los requisitos al efecto establecidos, o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven. En los dos últimos supuestos, la propia Comisión podrá además, inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema bancario mexicano, por un periodo de seis meses a diez años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a este u otros ordenamientos legales fueren aplicables.

Para imponer la inhabilitación la Comisión Nacional Bancaria deberá tomar en cuenta:

- I. La gravedad de la infracción y la conveniencia de evitar estar prácticas;
- II. El nivel jerárquico, los antecedentes, la antigüedad y las condiciones del infractor;
- III. Las conductas anteriores y las medidas de ejecución;
- IV. La reincidencia, y
- V. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados de la infracción.

Las resoluciones a que se refiere el primer párrafo, podrán ser recurridas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubieren notificado. La propia Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida, previa audiencia de las partes.

ARTICULO 26.—El órgano de vigilancia de las instituciones de banca múltiple, estará integrado por lo menos con un comisario de la serie "A", uno de la serie "B", uno por la serie "C" en su caso, así como sus respectivos suplentes.

ARTICULO 27.—Para la fusión de dos o más instituciones de banca múltiple, se requerirá autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien oír la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y se efectuará de acuerdo con las bases siguientes:

I. Las instituciones presentarán a la propia Secretaría, los proyectos de los acuerdos de las asambleas de accionistas relativos a la fusión, plan de fusión de las instituciones respectivas con indicación de las etapas en que deberá llevarse a cabo, estados contables que presenten la situación de las instituciones y la in-

formación a que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 10 de esta Ley;

II. La propia Secretaría al autorizar la fusión, cuidará en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público, así como de los trabajadores de las sociedades, en lo que correspondiera a sus derechos;

III. La autorización a que se refiere este artículo y los acuerdos de fusión, se inscribirán en el Registro Público de Comercio. A partir de la fecha en que se inscriban surtirá efectos la fusión;

IV. Una vez hecha la inscripción anterior, los acuerdos de fusión adoptados por las respectivas asambleas de accionistas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en la plaza en que tengan su domicilio las sociedades, y

V. Durante los noventa días naturales siguientes a partir de la fecha de publicación, los acreedores de las sociedades podrán oponerse judicialmente a lo mismo, con el único objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que esta oposición suspenda la fusión.

ARTICULO 28.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando en su caso, a la institución de banca múltiple afectada y oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria, podrá declarar la revocación de la autorización en los casos siguientes:

I. Si inicia operaciones sin presentar la escritura constitutiva para su aprobación, o si no inicia sus operaciones dentro del plazo de seis meses a partir de la aprobación de la escritura, o si al darse esta último no estuviere pagado el capital mínimo;

II. Si la institución no realiza la aportación establecida de conformidad con la fracción VI del artículo 122 de esta Ley;

III. Si la institución arroja pérdidas que afecten su capital mínimo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un plazo que no será menor de treinta días para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación de la institución dentro de los límites legales;

IV. Si a pesar de las observaciones de la Comisión Nacional Bancaria, la institución reiteradamente realiza operaciones distintas de las que le están permitidas, no mantiene las proporciones legales de activo y capitalización, no se ajusta a las provisiones o calificación de cartera de créditos o constitución de las reservas previstas en esta Ley, altera los registros contables, o bien, si a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cumple adecuadamente con las funciones de banca y crédito para las que le autorizada, por falta de diversificación de sus operaciones activas y pasivas de acuerdo con las con-

prácticas bancarias o por poner en peligro con su administración los intereses de los depositantes o inversionistas;

V. Si la institución proporciona información falsa, imprecisa o incompleta, de las mismas a las autoridades financieras;

VI. Cuando por causas imputables a la institución de banca múltiple no aparezcan debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado, y por tanto no colliquen su verdadera situación financiera;

VII. Si la institución se disuelve, entre en estado de liquidación o quiebra, salvo que el procedimiento respectivo termine por rehabilitación y el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria opinen favorablemente para que continúe con la autorización, y

VIII. Si la institución transgrede en forma grave o reiterada las disposiciones legales o administrativas que le son aplicables.

La declaración de revocación se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del domicilio social de la institución de que se trate, y pondrá en estado de liquidación a la institución de banca múltiple, la cual se practicará de conformidad con lo dispuesto por el artículo siguiente de esta Ley.

ARTICULO 29.—La disolución y liquidación de las instituciones de banca múltiple se regirán por lo dispuesto en los capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles o, según el caso, en el Capítulo I, del título VII de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, con las siguientes excepciones:

I. El cargo de síndico y liquidador deberá recaer en el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares del Crédito;

II. La Comisión Nacional Bancaria podrá solicitar la suspensión de pagos o declaración de quiebra, y

III. La prevista en el artículo 64 de esta Ley.

CAPÍTULO II

De las Instituciones de Banca de Desarrollo

ARTICULO 30.—Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá el reglamento orgánico de cada institución, en el que establecerá las bases conforme a las cuales se regirá su organización y el funcionamiento de sus órganos.

El reglamento orgánico y sus modificaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación o inscribirse en el Registro Público de Comercio.

ARTICULO 31.—Las instituciones de banca de desarrollo formularán anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales

de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos, mismas que deberán someter a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acuerdo con los lineamientos, medidas y acciones que al efecto establezca la propia Secretaría, determinará las modalidades que cada institución de banca de desarrollo, en función de la asignación global de gasto financiero que para estas instituciones establezca la Secretaría de Programación Presupuesta.

Los programas deberán formularse conforme los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas sectoriales propio Plan.

ARTICULO 32.—El capital social de las instituciones de banca de desarrollo estará representado por títulos de crédito que se regirán por las disposiciones aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en lo que sea compatible con su naturaleza y no esté previsto por el presente Capítulo.

Estos títulos se denominarán certificados de participación patrimonial, deberán ser nominativos y se dividirán en dos series: la serie "A", que representará en todo tiempo el sesenta y seis por ciento del capital de la sociedad, que sólo podrá ser suscrita por el Gobierno Federal; y la serie "B", que representará treinta y cuatro por ciento restante.

Los certificados de la serie "A" se emitirán en título único, serán intransmisibles y en ningún caso podrá cambiarse su naturaleza o los derechos que tienen al Gobierno Federal como titular de los mismos. Los certificados de la serie "B" podrán emitirse en uno o varios títulos.

ARTICULO 33.—Salvo el Gobierno Federal sociedades de inversión común, ninguna persona o moral podrá adquirir, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultánea o sucesivas, el control de certificados de aportación patrimonial de la serie "B" por más del cinco por ciento del capital pagado de una institución de banca de desarrollo. El mencionado límite se aplicará, así como a la adquisición del control por parte de persona que de acuerdo a las disposiciones de carácter legal que expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, daban considerarse para estos efectos una sola persona.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a las entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, puedan adquirir certificados de la serie "B", en una proporción mayor a la establecida en este artículo.

En ningún momento podrán participar en alguna en el capital de las instituciones de banca de desarrollo, personas físicas o morales extranje-

sociedades mexicanas en cuyos estatutos no figura cláusula de exclusión directa e indirecta de extranjeros.

Las personas que contravengan lo dispuesto en este artículo, perderán en favor del Gobierno Federal la participación de que se trate.

ARTICULO 34.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, mediante disposiciones de carácter general, la forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscripción, tenencia y circulación de los certificados de la serie "B". Dichas disposiciones se sujetarán a las modalidades que señalan las respectivas leyes orgánicas, considerando la especialidad sectorial y regional de cada institución de banca de desarrollo.

ARTICULO 35.—Los certificados de aportación patrimonial darán a sus titulares el derecho de participar en las utilidades de la institución emisora y, en su caso, en la cuota de liquidación.

Los certificados de la serie "B" serán de igual valor y conferirán los mismos derechos a sus tenedores, siendo los siguientes:

I. Designar y remover en el seno de la comisión consultiva a los miembros del consejo directivo y a los comisionarios correspondientes a esta serie de certificados;

II. Integrar la comisión consultiva a que se refiere el artículo 45 de la presente Ley;

III. Adquirir en igualdad de condiciones y en proporción al número de sus certificados, los que se emitan en caso de aumento de capital. Este derecho deberá ejercitarse en el plazo que el consejo directivo señale, al que se computará a partir del día en que se publique en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que no podrá ser inferior a treinta días;

IV. Recibir el reembolso de sus certificados a su valor en libros según el último estado financiero aprobado por el consejo directivo y revisado por la Comisión Nacional Bancaria, cuando se reduzca el capital social de la institución en los términos del artículo 38 de esta Ley;

V. Los demás que esta Ley les confiere.

ARTICULO 36.—Las instituciones de banca de desarrollo llevarán un registro de los certificados de aportación patrimonial de la serie "B", que deberá contener los datos relativos a los tenedores de los certificados y a las transmisiones que se realicen.

Estas instituciones sólo considerarán como propietarios de los certificados de la serie "B" a quienes aparezcan inscritos como tales en el registro a que se refiere este artículo. Al efecto, deberán inscribir en dicho registro y a petición de su legítimo tenedor, las transmisiones que se efectúen, siempre que se ajusten a lo establecido en el presente Capítulo.

ARTICULO 37.—El capital mínimo de las instituciones de banca de desarrollo será el que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, el cual estará íntegramente pagado. Cuando el capital social exceda del mínimo, deberá estar pagado por lo menos en un cincuenta por ciento, siempre que este porcentaje no sea menor del mínimo establecido.

Dichas instituciones podrán emitir certificados de aportación patrimonial no suscritos que conservarán un valor nominal y que serán entregados a los suscriptores contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso, fijan los mismos.

Cuando una institución de banca de desarrollo anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.

ARTICULO 38.—El capital social de las instituciones de banca de desarrollo podrá ser aumentado o reducido a propuesta del Consejo Directivo, por Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que modifique el Reglamento Orgánico respectivo, el cual será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En el caso de reducción, el consejo propondrá si la misma se efectúa mediante reducción del valor nominal de los certificados o amortización de una parte de ellos. En este último supuesto, los certificados de la serie "B" que correspondan amortizar serán determinados por sorteo ante la Comisión Nacional Bancaria.

Para efectos de la reducción, por canje o amortización, los certificados de la serie "B" se considerarán a su valor en libros según el último estado financiero aprobado por el consejo directivo y revisado por la Comisión Nacional Bancaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los casos y condiciones en que las instituciones de banca de desarrollo podrán adquirir transitoriamente los certificados de la serie "B", representativos de su propio capital.

ARTICULO 39.—La distribución de las utilidades y, en su caso, la cuota de liquidación, se hará en proporción a las aportaciones. Las pérdidas serán distribuidas en igual forma y hasta el límite de las aportaciones. Si hubiera pérdidas del capital social, éste deberá ser reintegrado o reducido antes de hacerse la distribución de utilidades.

Las utilidades sólo podrán repartirse después de aprobado el balance general, sin exceder el monto de las que realmente se hubieran obtenido.

ARTICULO 40.—La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará encomendada a un consejo directivo y a un director general, en los términos de sus propias leyes orgánicas.

ARTICULO 41.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará los bases de carácter general

para establecer la remuneración que corresponda a los consejeros de las instituciones de banca de desarrollo.

Las designaciones de consejeros en las instituciones de banca de desarrollo, se realizarán de conformidad con sus respectivas leyes orgánicas. En los casos de las designaciones de consejeros suplantes que representen a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial, éstas se efectuarán por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo recibir dichas designaciones en servidores públicos de la administración pública federal o profesionales independientes de reconocido honorabilidad, experiencia y prestigio en materias económica y financiera.

El cargo de consejero es personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes.

En ningún caso podrán ser consejeros el director general y los servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, así como las personas a que se refieren las fracciones II a VI del artículo 23 de esta Ley.

ARTICULO 42.—El consejo dirigirá la institución de banca de desarrollo con base en las políticas, lineamientos y prioridades que conforme a lo dispuesto por la Ley establezca el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el logro de los objetivos y metas de sus programas e instruirá al respecto al director general para la ejecución y realización de los mismos.

El consejo directivo en representación de la institución, podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes a su objeto y delegar discrecionalmente sus facultades en el director general, así como constituir apoderados y nombrar dentro de su seno delegados para actos o funciones específicos.

Serán facultades indelegables del consejo:

I. Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, a los delegados fiduciarios y a los demás que señale el reglamento orgánico, así como concederles licencias;

II. Nombrar y remover al secretario y al prosecretario del consejo;

III. Aprobar el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, agencias y oficinas tanto en el país como en el extranjero;

IV. Acordar la creación de comités regionales consultivos y de crédito, así como los de su seno;

V. Determinar las facultades de los distintos órganos y de los servidores públicos de la institución, para el otorgamiento de créditos;

VI. Aprobar, en su caso, por escrito dictamen de los comitarios, al balance general anual de la institución;

VII. Aprobar, en su caso, la constitución de reservas y la aplicación de utilidades, así como la forma y términos en que deberán realizarse;

VIII. Autorizar, conforme a las disposiciones aplicables, la publicación de los estados financieros;

IX. Aprobar los programas operativos y financieros, los presupuestos generales de gastos e inversiones y las estimaciones de ingresos anuales;

X. Aprobar los programas anuales de adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes muebles e inmuebles, de realización de obras y prestación de servicios, que la institución requiera, así como las políticas y bases generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la institución con terceros, en estas materias, de conformidad con las normas aplicables;

XI. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las modificaciones al reglamento orgánico y aprobar la cesión de activos y pasivos;

XII. Aprobar la emisión de certificados de aportación patrimonial, provisionales o definitivos;

XIII. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aumento o reducción del capital social;

XIV. Acordar los aumentos de capital pagado de la institución, así como fijar las primas, que en su caso deban pagar los suscriptores de certificados de aportación patrimonial;

XV. Acordar la emisión de obligaciones subordinadas;

XVI. Aprobar las inversiones en el capital de las empresas a que se refieren los artículos 75, 88 y 89 de esta Ley;

XVII. Aprobar los programas anuales de publicidad y propaganda de la institución;

XVIII. Aprobar la estructura orgánica básica, niveles de empleo y las bases para la elaboración de tabuladores de sueldos, así como para el otorgamiento de incentivos, de conformidad con las normas aplicables;

XIX. Conocer y opinar sobre las Condiciones Generales de Trabajo de la institución, y

XX. Las que establezca con este carácter la respectiva ley o reglamento orgánico de la institución.

En los supuestos establecidos en las fracciones III, VII, IX, X, XV, XVI, XVII y XVIII se requerirá de la autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el ejercicio de las atribuciones que se confieren a los consejos directivos en el presente artículo, sólo se sujetarán a lo dispuesto por sus leyes orgánicas, esta Ley y a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 43.—El director general, dentro de sus funciones administrativas, someterá a la consideración del consejo directivo los proyectos y progra-

mas relacionados con las facultades que al propio consejo confiere el artículo anterior.

El director general será designado por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 24 de esta Ley.

Los mismos requisitos deberán reunir los servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la del director general y los que para estos efectos determine el reglamento orgánico. Su designación se hará con base en los méritos obtenidos en la institución y, con sujeción a lo dispuesto por el citado artículo 24.

La Comisión Nacional Bancaria, con acuerdo de su Junta de Gobierno podrá determinar que se proceda a la remoción o suspensión de los delegados fiduciarios y servidores públicos que puedan obligar con su firma a la institución, con excepción del director general, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones o que en el desempeño de éstas no se hayan ajustado a las disposiciones legales y administrativas aplicables, oyendo previamente al interesado. Las resoluciones de remoción o suspensión podrán ser recurridas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los quince días que sigan a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La propia Comisión podrá recomendar al Ejecutivo Federal, a través de la mencionada Secretaría, la remoción del director general de la institución, cuando considere que éste, en el desempeño de sus funciones, no se ha ajustado a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

ARTICULO 44.—El órgano de vigilancia de las instituciones de banca de desarrollo, estará integrado por dos comisionarios, nombrados, uno por la Secretaría de Contraloría General de la Federación y otro por la comisión consultiva a que se refiere el artículo siguiente. Por cada comisionario propietario se nombrará el respectivo suplente. Los comisionarios tendrán las más amplias facultades para examinar los libros de contabilidad y demás documentación de la sociedad, incluida la del consejo, así como para llevar a cabo todos los demás actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, teniendo el derecho de asistir a las juntas del consejo directivo con voz.

ARTICULO 45.—Las instituciones de banca de desarrollo tendrán una comisión consultiva integrada por los titulares de los certificados de la serie "B", distintos del Gobierno Federal, que funcionará en la forma y términos que señale el reglamento orgánico de la institución.

La comisión se reunirá por lo menos una vez al año, pudiendo ser convocada en cualquier tiempo

por los tenedores que representen la tercera parte o más del capital correspondiente a dicha serie, por el consejo directivo, por el director general, por dos consejeros de la serie "B" o por el comitativo de la misma serie, y se ocupará de los asuntos siguientes:

I. Conocer y opinar sobre las políticas y criterios conforme a los cuales la institución lleva a cabo sus operaciones;

II. Analizar y opinar sobre el informe de actividades y los estados financieros que le presenta el consejo directivo por conducto del director general;

III. Opinar sobre los proyectos de aplicación de utilidades;

IV. Formular al consejo directivo las recomendaciones que estime conveniente sobre las materias de que tratan las fracciones anteriores;

V. Designar y remover a los consejeros y comisionarios de la serie "B", con el acuerdo de por lo menos las dos terceras partes;

VI. Aprobar los informes anuales de actuación que le presenten los consejeros serie "B" y en su caso, tomar las medidas que juzgue oportunas, y

VII. Los demás de carácter consultivo que se señalen en el reglamento orgánico.

TITULO TERCERO

De las Operaciones

CAPITULO I

De las Reglas Generales

ARTICULO 46.—Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes.

I. Recibir depósitos bancarios de dinero:

- A la vista;
- Retirables en días preestablecidos;
- De ahorro, y
- A plazo o con previo aviso;

II. Aceptar préstamos y créditos;

III. Emitir bonos bancarios;

IV. Emitir obligaciones subordinadas;

V. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior;

VI. Efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos;

VII. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;

VIII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptación, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas de crédito.

IX. Operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente Ley y de la Ley del Mercado de Valores;

X. Promover la organización y transformación de toda clase de empresas o sociedades mercantiles

inscribir y conservar acciones o partes de interés en las mismas, en los términos de esta Ley;

XI. Comparar con documentos mercantiles por cuenta propia;

XII. Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros operaciones con oro, plata y divisas, incluyendo portafolios sobre estas últimas;

XIII. Prestar servicio de cajas de seguridad;

XIV. Expedir cartas de crédito previa recepción de su importe, hacer efectivos créditos y realizar pagos por cuenta de clientes;

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a las que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;

XVI. Recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, de títulos valores y en general de documentos mercantiles;

XVII. Actuar como representante común de los titulares de títulos de crédito;

XVIII. Hacer servicio de caja y tesorería relativa a títulos de crédito, por cuenta de los emisores;

XIX. Llevar la contabilidad y los libros de actas de la registro de sociedades y empresas;

XX. Desempeñar el cargo de albacea;

XXI. Desempeñar la sindicatura o encargarse de la liquidación judicial o extrajudicial de negociaciones, establecimientos, concursos o herencias;

XXII. Encargarse de hacer avalúos que tendrán misma fuerza probatoria que las leyes asignan a hechos por corredor público o perito;

XXIII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda, y

XXIV. Los análogos y conexos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria.

ARTICULO 47.—Las instituciones de banca de desarrollo realizarán, además de las señaladas en el artículo anterior, las operaciones necesarias para la adecuada atención del correspondiente sector de la economía nacional y el cumplimiento de las funciones específicas que les sean propios, conforme a las modalidades y excepciones que respecto a las previstas en otras leyes, determinen sus leyes orgánicas. Las operaciones a que se refieren las fracciones del artículo anterior, las realizarán las instituciones de banca de desarrollo con vistas a facilitar a los beneficiarios de sus actividades, el acceso al servicio bancario y crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y el uso de los servicios que presta el Sistema Bancario Mexicano, de manera que no se produzcan injustos en los sistemas de captación de recursos públicos.

Los bonos bancarios que emitan las instituciones

de banca de desarrollo, deberán propiciar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión institucional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará los lineamientos y establecerá las medidas y mecanismos que procuren el mejor aprovechamiento y la canalización más adecuada de los recursos de las instituciones de banca de desarrollo, considerando planes coordinados de financiamiento entre este tipo de instituciones, las organizaciones nacionales auxiliares del crédito, los fondos y fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, y las instituciones de banca múltiple.

ARTICULO 48.—Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas, y de servicios, así como las operaciones con oro, plata y divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Banco de México, con el propósito de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia.

En todo caso, las medidas que dicte el Banco de México se apegarán a las disposiciones legales aplicables y a las directrices de política monetaria y crediticia que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio de las atribuciones que le asignan las leyes respecto a la dirección de dicha política, así como para planear, coordinar, evaluar y vigilar el Sistema Bancario Mexicano.

ARTICULO 49.—Las instituciones de crédito invertirán los recursos que captan del público y llevarán a cabo las operaciones que den origen a su pasivo contingente, en términos que les permitan mantener condiciones adecuadas de seguridad y liquidez. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria, determinará las clasificaciones de los activos y de las operaciones causantes de pasivo contingente, y de otras operaciones que determine la propia Secretaría, en función de su seguridad, determinando, asimismo, los porcentajes máximos de pasivo exigible y de pasivo contingente, que podrán estar representados por los distintos grupos de activos y de operaciones resultantes de las referidas clasificaciones.

Las clasificaciones y porcentajes mencionados podrán ser determinados para diferentes tipos de pasivos o para distintas instituciones clasificadas según su ubicación, magnitud, composición de sus pasivos u otros criterios. En el caso de las instituciones de banca de desarrollo, se considerará el origen de sus recursos y los objetivos y funciones específicas que les correspondan.

ARTICULO 50.—Las instituciones de crédito

deberán tener capital neto por monto no menor a la cantidad que resulte de aplicar un porcentaje que no será inferior al seis por ciento, a la suma de sus activos y de sus operaciones contingentes de pasivo contingente, y de otras operaciones que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expuestos a riesgo significativo, conforme lo señala la propia Secretaría mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria, y tomando en cuenta los usos bancarios internacionales respecto a la adecuada capitalización de las instituciones de crédito.

El capital neto tampoco deberá ser inferior, en caso alguno, a la suma de las cantidades que se obtengan de aplicar a los grupos de activo y demás operaciones a que se refiere el párrafo anterior, los porcentajes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine mediante disposiciones de carácter general, para cada uno de esos grupos, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria. En estas disposiciones se establecerá que para los créditos señalados en el artículo 73 de esta Ley y para las inversiones a que se refiere la fracción III del artículo 75 del propio Ordenamiento, los porcentajes de capitalización podrán ser incrementados en los términos que específicamente establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se considerarán integrantes del capital neto, el capital pagado y a las reservas que al respecto señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adicionando o sustrayendo, según corresponda, la utilidad no aplicada o la pérdida no absorbida, de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio en curso, y deduciendo las inversiones en el capital de las sociedades a que se refieren los artículos 89 de esta Ley y 31 de la Ley para Regular las Actividades Financieras, excepto las sociedades de inversión de renta fija. La propia Secretaría podrá determinar que las inversiones a que se refiere el citado artículo 75, deban deducirse del capital neto de la institución. También podrá computarse como capital neto, para los mismos efectos, la totalidad o parte del pasivo captado a través de la colocación de obligaciones subordinadas, en los términos y condiciones que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el caso de las instituciones de banca de desarrollo, el capital neto se fijará conforme a las modalidades que se prevén en las respectivas leyes orgánicas, considerando la naturaleza de las operaciones específicas de la institución y los activos correspondidos por recursos no captados del público.

ARTICULO 51.—Al realizar sus operaciones las instituciones de banca múltiple deben diversificar sus riesgos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comi-

sión Nacional Bancaria, determinará mediante reglas generales:

I. Los porcentajes máximos de los pasivos en los que de una institución que correspondan a obligaciones directas o contingentes en favor de una misma persona, entidad o grupo de personas que de acuerdo con las mismas reglas deban considerarse pasivos afectos, como un solo acreedor, y

II. Los límites máximos del importe de las responsabilidades directas y contingentes incluyendo las inversiones en títulos representativos de capital, a una misma persona, entidad o grupo de personas que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para una institución de crédito.

Estos límites podrán referirse también a entidades o segmentos del mercado que representen una concentración de riesgos.

ARTICULO 52.—Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. Las operaciones y servicios cuya prestación pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y la responsabilidad de correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

ARTICULO 53.—Las operaciones con valores que realicen las instituciones de crédito actuando por cuenta propia, se realizarán en los términos previstos por esta Ley y por la Ley del Mercado de Valores, y se sujetarán a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria.

Cuando las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, se realicen con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, deberán llevarse a cabo con la intermediación de casas de bolsa, salvo en los casos siguientes:

I. Aquellas con valores emitidos, aceptados o garantizados, por instituciones de crédito;

II. Aquellas que el Banco de México, por razones de política crediticia o cambiaria, determine mediante reglas de carácter general, y

III. Las que excepte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que se efectúen para:

- a) Financiar empresas de nueva creación o ampliaciones a las existentes;
- b) Transmitir proporciones importantes del capital de empresas; y
- c) Otros propósitos a los cuales no se adecuen los mecanismos normados del mercado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para resolver sobre las excepciones previstas en este artículo, escuchará la opinión del Banco de México, así como de la Comisión Nacional Bancaria o de la Comisión Nacional de Valores, según la materia que correspondá a su ámbito de competencia.

ARTICULO 54.—Los reportos sobre valores que celebren las instituciones de crédito se sujetarán a las disposiciones aplicables a esa clase de operaciones, así como a las siguientes:

I. Se formularán de la manera que, mediante reglas de carácter general, determine el Banco de México, no siendo necesario que dichos reportos consten por escrito;

II. Si el plazo del reporte vence en un día que no fuere hábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente;

III. El plazo del reporte no podrá exceder de 180 días. La operación podrá prorrogarse en la forma que determine el Banco de México, mediante las reglas señaladas en la fracción I anterior; y

IV. Salvo pacto en contrario, si el día en que el reporte deba liquidarse el reportado no liquidado la operación ni ésta es prorrogada, se tendrá por abandonada y el reportador podrá exigir desde luego el reportado el pago de las diferencias que resulten a su cargo.

ARTICULO 55.—Las inversiones con cargo al capital pagado y reservas de capital de las instituciones de crédito, se sujetarán a las siguientes reglas:

I. No excederá del sesenta por ciento del capital pagado y reservas de capital el importe de las inversiones en mobiliario, en inmuebles o en derechos reales que no sean de garantía, más el importe de las inversiones en el capital de las sociedades a que se refiere el artículo 88 de esta Ley;

II. El importe de los gastos de instalación no podrá exceder del diez por ciento del capital pagado y reservas de capital. La Comisión Nacional Bancaria podrá aumentar temporalmente en casos individuales esta porcentaja, así como el señalado en la fracción que antecede, cuando a su juicio la cantidad resultante, sea insuficiente para el destino indicado;

III. El importe total de inversiones en el capital de sociedades a que se refiere el artículo 89 de esta Ley, no será superior al excedente del capital pagado y reservas de capital de la institución sobre el capital mínimo, ni del cincuenta por ciento de dicho capital pagado y reservas de capital; y

IV. Podrán efectuarse en las demás operaciones activas previstas en esta Ley.

La suma de las inversiones a que se refieren las

fracciones I, II y III de este artículo, el monto de las operaciones que exceda los límites previstos para la inversión de sus pasivos, y el valor estimado de los bienes, derechos y títulos que resulten en pago de créditos o como adjudicación, no podrá exceder al capital pagado y reservas de capital de la institución.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará, mediante disposiciones de carácter general, las reservas de capital computables para los efectos de este artículo.

CAPITULO II

De las Operaciones Pasivas

ARTICULO 56.—El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, podrá en cualquier tiempo designar o sustituir beneficiarios, así como, modificar en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a los beneficiarios que el titular haya designado expresamente y por escrito para tal efecto, sin exceder el mayor de los límites siguientes:

I. El equivalente a veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, por operación; o

II. El equivalente al setenta y cinco por ciento del importe de cada operación.

Si existiere excedente, deberá entregarse en los términos previstos por la legislación común.

ARTICULO 57.—En las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley los depositantes o inversionistas podrán autorizar a terceros para hacer disposiciones de dinero, bastando para ello la autorización firmada en los registros especiales que lleve la institución de crédito.

ARTICULO 58.—Las condiciones generales que se establezcan respecto a los depósitos a la vista, retirables en días preestablecidos y de ahorro, podrán ser modificados por la institución conforme a las disposiciones aplicables, mediante aviso dado con dos días hábiles de anticipación, por escrito, o través de publicaciones en periódicos de amplia circulación de su colocación en lugares abiertos al público en oficinas de la propia institución.

Cuando se cumplan los requisitos para la remisión del estado autorizado de las cantidades abonadas y cargadas a la cuenta, que deberán especificarse en las condiciones generales para los depósitos a la vista y retirables en días preestablecidos, los asientos que figuren en la contabilidad de la institución harán fe, salvo prueba en contrario, en juicio respectivo.

ARTICULO 59.—Los depósitos de ahorro son de

pósitos bancarios de dinero con interés capitalizable. Se comprobarán con las anotaciones en la libreta especial que las instituciones depositarias deberán proporcionar gratuitamente a los depositantes. Las libretas contendrán los datos que señalen las condiciones respectivas y serán título ejecutivo en contra de la institución depositaria, sin necesidad de reconocimiento de firma ni otro requisito previo alguno.

Las cuentas de ahorro podrán ser abiertas a favor de menores de edad. En ese caso, las disposiciones de fondos sólo podrán ser hechas por los representantes del titular.

ARTICULO 60.—Las cantidades que tengan por lo menos un año de depósito en cuenta de ahorro no estarán sujetas a embargo hasta una suma equivalente a la que resulta mayor de los límites señalados en el artículo 56 de esta Ley.

Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable a las cantidades correspondientes a una cuenta por persona, independientemente de que una misma tenga diversas cuentas de ahorro en una o varias instituciones.

ARTICULO 61.—Los intereses de los instrumentos bancarios de captación que no tengan fecha de vencimiento, que en el transcurso de cinco años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y con un saldo que no exceda el equivalente de una vez el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global que llevará la institución para esos efectos.

Cuando el depositante o inversionista se presente para actualizar su estado de cuenta o realice un depósito o retiro, la institución deberá retirar de la cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a la cuenta respectiva, actualizando el saldo a la fecha.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe conjunto por operación no sea superior al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

ARTICULO 62.—Los depósitos a plazo podrán estar representados por certificados que serán títulos de crédito y producirán acción ejecutiva respecto a la emisora, previo requerimiento de pago ante el notario público. Deberán consignar: la mención de ser certificados de depósito bancario de dinero, la expresión del lugar y fecha en que se suscriban, el nombre y la firma del emisor, la suma depositada, el tipo de interés pactado, el régimen de pago de interés, el

término para retirar el depósito y el lugar de pago único.

ARTICULO 63.—Los bonos bancarios y sus cupones serán títulos de crédito a cargo de la institución emisora y producirán acción ejecutiva respecto a la misma, previo requerimiento de pago ante el notario público. Se emitirán en serie mediante declaración unilateral de voluntad de dicha institución que se hará constar ante la Comisión Nacional Bancaria, en los términos que ésta señale y deberán contener:

- I. La mención de ser bonos bancarios y títulos al portador;
- II. La expresión de lugar y fecha en que se suscriban;
- III. El nombre y la firma de la emisora;
- IV. El importe de la emisión, con especificación del número y el valor nominal de cada bono;
- V. El tipo de interés que en su caso devengarán;
- VI. Los plazos para el pago de intereses y de capital;
- VII. Las condiciones y las formas de amortización;
- VIII. El lugar de pago único, y
- IX. Los plazos o términos y condiciones del acta de emisión.

Podrán tener anejos cupones para el pago de intereses y, en su caso, para las amortizaciones parciales. Los títulos podrán amparar uno o más bonos. Las instituciones se reservarán la facultad del reembolso anticipado, misma que sólo podrán ejercer cuando se satisfaga el requisito señalado en el último párrafo del artículo 106 de esta Ley.

La emisora mantendrá los bonos en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, entregando a los titulares de los mismos, constancia de sus tenencias.

ARTICULO 64.—Las obligaciones subordinadas y sus cupones serán títulos de crédito con los mismos requisitos y características que los bonos bancarios, salvo los previstos en el presente artículo.

En caso de liquidación de la emisora, el pago de las obligaciones subordinadas se hará a prorrata después de cubrir todas las demás deudas de la institución, pero antes de repartir a los titulares de las acciones o de los certificados de aportación patrimonial, en su caso, al haber social. En el acta de emisión relativa y en los títulos que se expidan deberá constar en forma notoria, lo dispuesto en este párrafo.

Estos títulos podrán emitirse en moneda nacional o extranjera, mediante declaración unilateral de voluntad de la emisora, que se hará constar ante la Comisión Nacional Bancaria, previa autorización que en cada caso otorgue el Banco de México. Al efecto, las solicitudes de autorización deberán presentarse por escrito al citado banco, acompañando el respectivo proyecto de acta de emisión e indicando las con-

diciones bajo las cuales se pretendan colocar dichos títulos.

En el acto de emisión podrá designarse un representante común de los tenedores de las obligaciones, en cuyo caso, se deberán indicar sus derechos y obligaciones, así como los términos y condiciones en que podrá procederse a su remoción y a la designación de nuevo representante. No será aplicable a estos representantes, lo previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para los representantes comunes de obligacionistas.

La inversión de los pasivos captados a través de la colocación de obligaciones subordinadas, se hará de conformidad con las disposiciones que el Banco de México dicta al efecto. Dichos recursos no podrán invertirse en los activos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 55 de esta Ley, salvo aquellos que provengan de la colocación de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a títulos representativos de capital.

CAPITULO III

De las Operaciones Activas

ARTICULO 65.—Para el otorgamiento de sus financiamientos, las instituciones de crédito deberán estimar la viabilidad económica de los proyectos de inversión respectivos, los plazos de recuperación de éstos, las relaciones que guarden entre sí los distintos conceptos de los estados financieros o la situación económica de los acreedores, y la calificación administrativa y moral de estos últimos, sin perjuicio de considerar las garantías que, en su caso, fueran necesarias. Los montos, plazos, regímenes de amortización, y en su caso, periodos de gracia de los financiamientos, deberán tener una relación adecuada con la naturaleza de los proyectos de inversión y con la situación presente y previsible de los acreedores.

La Comisión Nacional Bancaria vigilará que las instituciones de crédito observen debidamente lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO 66.—Los contratos de crédito refinancionario y de habilitación o avío, que celebren las instituciones de crédito, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y a las bases siguientes:

I. Se consignarán, según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en póliza ante corredor público titulado, en escritura pública o en contrato privado, que en este último caso se limitará por triplicado ante dos testigos y se ratificará ante notario público, corredor público titulado, juez de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del Registro Público correspondiente;

II. Sin satisfacer más formalidades que las señaladas en la fracción anterior, se podrán establecer garantías reales sobre bienes muebles o inmuebles, además de los que constituyen la garantía propia de

estos créditos, o sobre la unidad industrial, agrícola, ganadera o de servicios con las características que se mencionan en el artículo siguiente;

III. Los bienes sobre los cuales se constituya la prenda, en su caso, podrán quedar en poder del deudor en los términos establecidos en el artículo 329 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

IV. El deudor podrá usar y disponer de la prenda que quede en su poder, conforme a lo que se pacte en el contrato, y

V. No excederá del cincuenta por ciento la parte de los créditos refinanciosos que se destine a cubrir los pasivos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 323 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La Comisión Nacional Bancaria podrá autorizar, en casos excepcionales, que se exceda este límite.

ARTICULO 67.—Las hipotecas constituidas en favor de instituciones de crédito sobre la unidad completa de una empresa industrial, agrícola, ganadera o de servicios, deberán comprender la concesión o autorización respectiva, en su caso; todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la explotación, consideradas en su unidad. Podrán comprender además, el dinero en caja de la explotación corriente y los créditos a favor de la empresa, originados por sus operaciones, sin perjuicio de la posibilidad de disponer de ellos y de sustituirlos en el movimiento normal de las operaciones, sin necesidad del consentimiento del acreedor, salvo pacto en contrario.

Las instituciones de crédito acreedoras de las hipotecas a que se refiere este artículo, permitirán la explotación de los bienes afectos a los mismos conforme al destino que les corresponda, y tratándose de bienes afectos a una concesión de servicio público, las alteraciones o modificaciones que sean necesarias para la mejor prestación del servicio público correspondiente. Sin embargo, las instituciones acreedoras podrán oponerse a la venta o enajenación de parte de los bienes y a la fusión con otras empresas, en caso de que se origine con ello un peligro para la seguridad de los créditos hipotecarios.

Las hipotecas a que se refiere este artículo deberán ser inscritas en el Registro Público de la Propiedad del lugar o lugares en que estén ubicados los bienes.

Será aplicable en lo pertinente a las hipotecas a que se refiere este artículo, lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

ARTICULO 68.—Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títu-

os ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

El estado de cuenta certificado por el contador o que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuarios, en todos los casos en que por establecerse así en el contrato:

I. El acreditado o el mutuario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y

II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados.

ARTICULO 69.—La prenda sobre bienes y valores se constituirá en la forma prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, bastando al efecto que se contenga en el documento de crédito respectivo con expresión de los datos necesarios para identificar los bienes dados en garantía.

En todo anticipo sobre títulos o valores, de prenda sobre ellos, sobre sus frutos y mercancías, las instituciones de crédito podrán efectuar la venta de los títulos, bienes o mercancías, en los casos que proceda de conformidad con la mencionada ley por medio de arrendador o de dos comerciantes de la localidad, conservando en su poder la parte del precio que cubra las responsabilidades del deudor, que podrán aplicar en compensación de su crédito y guardando a disposición de aquél el sobrante que pueda existir.

Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la prenda que se otorgue con motivo de préstamos concedidos por las instituciones de crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero, la cual podrá constituirse entregando al arrendador la factura que acredite la propiedad sobre la cosa comprada, haciendo en ella la anotación respectiva. El bien quedará en poder del deudor con el carácter de depositario, que no podrá revocársele en tanto esté cumpliendo con los términos del contrato de préstamos.

ARTICULO 70.—Cuando las instituciones de crédito reciban en prenda créditos en libros, bastará que se haga constar así, en los términos de lo anterior, en el contrato correspondiente, que los créditos dados en prenda se hayan especificado en las notas o relaciones respectivas, y que esas relaciones hayan sido transcritas por la institución acreedora en un libro especial en asientos sucesivos, en orden cronológico, en el que se expresará el día de la inscripción, a partir de la cual la prenda se entenderá constituida.

El deudor se considerará como mandatario del acreedor para el cobro de los créditos, y tendrá las

obligaciones y responsabilidades civiles y penales que al mandatario correspondan.

ARTICULO 71.—La apertura de crédito comercial documentario obliga a la persona por cuenta de quien se abre el crédito, a hacer provisión de fondos a la institución que asume el pago, con antelación bastante. El incumplimiento de esta obligación anulará los derechos del beneficiario en caso de crédito irrevocable. El contrato de apertura de crédito será título ejecutivo para exigir el cumplimiento de dicha obligación.

Salvo pacto en contrario y en los términos de los usos internacionales a este respecto, ni la institución pagadora, ni sus corresponsales, asumirán riesgo por la cantidad, cantidad o peso de las mercancías, por la exactitud, autenticidad o valor legal de los documentos, por retrasos de correo o telégrafo, por fuerza mayor, por incumplimiento por sus corresponsales de las instrucciones transmitidas, ni por aceptar endos que parecieran o por mayor cantidad de la estipulada en la apertura de crédito.

ARTICULO 72.—Cuando el crédito tenga garantía real, el acreedor podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, o el que en su caso corresponda, conservando la garantía real y su preferencia aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.

ARTICULO 73.—Las instituciones de banca múltiple reportarán del acuerdo de por lo menos cuatro u ocho consejeros de la serie "A" y tres o seis de las series "B" y "C" de su consejo de administración, según se trate de consejos integrados por once o por veintidós miembros, respectivamente, para celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación:

I. Las personas físicas y morales que detentan directa o indirectamente el control del uno por ciento o más de los títulos representativos del capital de la institución o de la sociedad controladora del grupo financiero al que en su caso pertenezca la propia institución;

II. Los miembros del consejo de administración de la institución, propietarios y suplentes;

III. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad o civil hasta el segundo grado con las personas señaladas en las fracciones anteriores;

IV. Las personas debidas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan obligar a la institución;

V. Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en las que la institución detente directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital;

VI. Las personas morales en que los funcionarios o consejeros de las instituciones sean funcionarios o consejeros de aquéllas, y

VII. Las personas morales en las que participen de las personas señaladas en las fracciones anteriores, así como las de la fracción VI del artículo 106 de esta Ley, de forma directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.

Las operaciones que deban ser sometidas a la aprobación del consejo de administración, se presentarán por conducto y con la opinión favorable del comité de crédito respectivo. De otorgarse ésta, la institución deberá presentar a la Comisión Nacional Bancaria copia certificada del acuerdo en el que consta la aprobación del consejo e informarle del otorgamiento y en su caso renovación, así como la forma de pago o extinción de estos créditos, en los términos que señale la propia Comisión.

Se exceptúan de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, los créditos que no excedan del mayor de los montos siguientes: el equivalente a diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal o el 0.2 por ciento del capital neto de la institución, tratándose de personas físicas; o de cincuenta mil veces dicho salario, o del uno por ciento del citado capital neto, en el caso de personas morales; como saldo total.

La suma total de los créditos referidos no podrá exceder del veinte por ciento del importe de la cartera de créditos de la institución.

La Comisión Nacional Bancaria, a solicitud de la institución, previo acuerdo de su consejo de administración, podrá establecer excepciones, cuando en virtud de las características del crédito, lo estime pertinente y no se contravengan las sanas prácticas bancarias.

ARTICULO 74.—Las instituciones de crédito estarán obligadas a participar en el sistema de información sobre operaciones activas que el Banco de México administre.

Dichas instituciones deberán proporcionar al Banco de México la información sobre sus operaciones activas, incluyendo el incumplimiento de sus clientes a las condiciones pactadas en tales operaciones, con la periodicidad y en los términos que el propio Banco indique.

El Banco de México podrá, cuando así lo estime conveniente, notificar a todas las entidades financieras del país, el nombre y el importe de la responsabilidad de un mismo deudor, el número de entidades entre las cuales dichas responsabilidades estén distribuidas, así como la calificación que cada una de las entidades consigne para sus respectivos créditos, guardando secreto respecto de la denominación de tales entidades acreedoras.

Las instituciones de crédito participantes deberán efectuar las aportaciones que el Banco de México determine, para cubrir los costos de operación del sistema. En su caso, dicho Banco podrá cargar en la cuenta que al efecto les lleva el importe de tales aportaciones.

ARTICULO 75.—Las instituciones de banca múltiple podrán realizar inversiones en títulos representativos del capital de sociedades distintas a las señaladas en los artículos 88 y 89 de esta Ley, conforme a las bases siguientes:

I. Hasta el cinco por ciento del capital pagado de la emisora;

II. Mas del cinco y hasta el quince por ciento del capital pagado de la emisora, durante un plazo que no exceda de tres años, previo acuerdo de por lo menos cuatro u ocho consejeros de la serie "A" y tres u seis de las series "B" y "C" de su consejo de administración, según se trate de consejos integrados por once o por veintidós miembros, respectivamente. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ampliar el plazo a que se refiere esta fracción, considerando la naturaleza y situación de la empresa de que se trate, y

III. Por porcentajes y plazos mayores, cuando se trata de empresas que desarrollen proyectos nuevos de larga maduración o realicen actividades susceptibles de fomento, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien la otorgará o negará discrecionalmente, oyendo la opinión del Banco de México. Dicha Secretaría fijará las condiciones y plazos de tenencia de las acciones, de acuerdo con la naturaleza y finalidades de las propias empresas.

Las instituciones de banca múltiple sujetarán estas inversiones a las medidas que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las diversificarán de conformidad con las bases previstas en los artículos 49 y 51 de esta Ley, debiendo en todo caso observar los límites que propicien la dispersión de riesgos, así como una sana revolvencia para apoyar a un mayor número de proyectos.

El importe total de las inversiones que cada institución realice en base a este artículo, no excederá del cinco por ciento de los recursos captados del público en el mercado nacional.

Las inversiones a que se refiere este artículo, que realicen las instituciones de crédito en cuyo capital participe el Gobierno Federal, no computarán para considerar a las emisoras como empresas de participación estatal, y por lo tanto éstas no estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las entidades de la Administración Pública Federal.

ARTICULO 76.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria, determina-

rá mediante disposiciones de carácter general, las bases para la calificación de la entera de créditos de las instituciones de crédito, la documentación o información que éstas recabarán para el otorgamiento, renovación y durante la vigencia de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía real, los requisitos que dicha documentación habrá de reunir y la puntualidad con que debe cumplirse, así como la integración de las reservas preventivas, que por cada rango de calificación tengan que constituirse.

CAPITULO IV De los Servicios

ARTICULO 77.—Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos en el artículo 46 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, y con apego a las normas prácticas que propicien la seguridad de estas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de tales servicios.

ARTICULO 78.—El servicio de cajas de seguridad obliga a la institución que lo presta, a responder de la integridad de las cajas y mediante el pago de la contraprestación correspondiente, mantener el libre acceso a ellas en los días y horas hábiles. El tomador de la caja es responsable por todos los gastos, daños y perjuicios que origine a la institución con motivo de su uso.

Las condiciones generales y el contrato que para la prestación de este servicio celebren las instituciones de crédito, deberán estipular con claridad los casos, formalidades y requisitos que se observarán para que la institución pueda proceder, ante notario público, a la apertura y desocupación de la caja, así como lo relativo a la custodia de los bienes estraidos.

ARTICULO 79.—En las operaciones de fideicomiso, mandato, comisión, administración o custodia, las instituciones abrirán contabilidades especiales por cada contrato, debiendo registrar en las mismas y en su propia contabilidad el dinero y demás bienes, valores o derechos que se les confían, así como los incrementos o disminuciones, por los productos o gastos respectivos. Invariablemente deberán coincidir los saldos de las cuentas controladas de la contabilidad de la institución de crédito, con los de las contabilidades especiales.

En ningún caso estos bienes estarán afectos a otras responsabilidades que las derivadas del fideicomiso mismo, mandato, comisión o custodia, o las que contra ellos correspondan a terceros de acuerdo con la Ley.

ARTICULO 80.—En las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, las instituciones desempeñarán su cometido y operarán sus facultades por medio de sus delegados fiduciarios.

La institución responderá civilmente por los daños

y perjuicios que se causen por la falta de cumplimiento en las condiciones o términos señalados en el fideicomiso, mandato o comisión, o la Ley.

En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un comité técnico, dar las reglas para su funcionamiento y tipo sus facultades. Cuando la institución de crédito abra operaciones a los destinatarios o usuarios de este comité, estará libre de toda responsabilidad.

ARTICULO 81.—Las operaciones con valores que realicen las instituciones de crédito en cumplimiento de fideicomisos, mandatos, comisiones y contratos de administración, se realizarán en términos de las disposiciones de esta Ley y de la Ley del Mercado de Valores, así como de conformidad con las reglas generales que, en su caso, emita el Banco de México oyendo la opinión de la Comisión Nacional de Valores, con vistas a procurar el desarrollo ordenado del mercado de valores.

ARTICULO 82.—El personal que las instituciones de crédito utilicen directa o exclusivamente para la realización de fideicomisos, no formará parte del personal de la institución, sino que, según los casos se considerará al servicio del patrimonio dado en fideicomiso. Sin embargo, cualquier derecho que existan a esas personas conforme a la Ley, los ejercerán contra la institución de crédito, la que, en su caso, para cumplir con las resoluciones que la autoridad competente dictare oportunamente, en la medida que sea necesario, los bienes materia del fideicomiso.

ARTICULO 83.—A falta de procedimiento convenido en forma expresa por las partes en el acto constitutivo de los fideicomisos que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de obligaciones, se aplicará el procedimiento establecido en los dos primeros párrafos del artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a petición del fiduciario.

Si el deudor no se opone conforme a lo previsto en dicho artículo, el juez mandará que se dé cumplimiento a lo establecido en el acto constitutivo del fideicomiso o sus modificaciones.

ARTICULO 84.—Cuando la institución de crédito, al ser requerida, no rinda las cuentas de su gestión dentro de un plazo de quince días hábiles, o cuando sea declarada por sentencia ejecutoriada, culpable de las pérdidas o menoscabo que sufran los bienes dados en fideicomiso o responsable de esas pérdidas o menoscabos por negligencia grave, procederá su remoción como fiduciario.

Las acciones para pedir cuentas, para exigir la responsabilidad de las instituciones de crédito y para pedir la remoción, corresponderán al fideicomisario o a sus representantes legales, y a falta de éstos al ministerio público, sin perjuicio de poder el fideicomisante reservarse en el acto constitutivo del fideicomiso o en las modificaciones del mismo, el derecho para operar esta acción.

En caso de renuncia o remoción se estará a la disposición en el párrafo final del artículo 350 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

ARTICULO 85.—Cuando se trate de operaciones de fideicomiso que constituya el Gobierno Federal o que de él mismo, para los efectos de este artículo declare de interés público a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no será aplicable el plazo que establece la fracción III del artículo 359 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

TITULO CUARTO

De las Disposiciones Generales y de la Contabilidad

CAPITULO I

De las Disposiciones Generales

ARTICULO 86.—Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentran en liquidación o en procedimiento de quiebra, su consideración de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni a ser tratadas de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.

ARTICULO 87.—Las instituciones de banca múltiple deberán someter a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus programas anuales sobre el establecimiento, reubicación y clausura de sucursales, agencias y oficinas en el país.

Las instituciones de crédito requerirán autorización de la mencionada Secretaría, para el establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar, que las sucursales de instituciones de crédito establecidas en el extranjero realicen operaciones que no estén previstas en las leyes mexicanas, para ajustarse a las condiciones del mercado en que operen, para lo cual tendrán que proporcionar a la mencionada Secretaría los antecedentes, procedimientos, disposiciones y formalidades inherentes a la práctica de cada tipo de operación.

La instalación y el uso de equipos y sistemas automatizados, que se destinen a la calibración y a la prestación especializada de servicios directos al público, se sujetarán a las reglas generales que dicte en su caso la citada Secretaría.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria, para autorizar la señalada en los párrafos segundo y tercero de este artículo, así como para dictar las reglas a que se refiere el párrafo anterior.

ARTICULO 88.—Las instituciones de banca múltiple requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para invertir en títulos representativos del capital social de empresas que los

prestan servicios complementarios o auxiliares en su administración o en la realización de su objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas.

Las sociedades a que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán a las reglas generales que dicte la misma Secretaría y a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria, y en consecuencia deberán cubrir las cuotas de inspección y vigilancia en los términos que determina la propia Secretaría.

ARTICULO 89.—Se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que las instituciones de crédito inviertan en títulos representativos del capital social de entidades financieras del exterior.

Las instituciones de banca múltiple que no formen parte de grupos financieros, podrán invertir en el capital social de organizaciones auxiliares del crédito o intermediarios financieros no bancarios, que no sean casas de bolsa, instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas, previa autorización de la propia Secretaría y de acuerdo con las reglas generales que en su caso emita la citada Dependencia.

Las solicitudes de autorización de las inversiones a que se refiere el párrafo anterior, deberán acompañarse del documento que precise las políticas para resolver el probable conflicto de interés que en la realización de sus operaciones con el público pudieren presentarse.

Las instituciones de crédito, y las filiales a que se refiere el segundo párrafo de este artículo en cuyo capital participen podrán utilizar depósitos o cuentas iguales o semejantes, actuar de manera conjunta y ofrecer servicios complementarios.

Estos intermediarios, cuando tengan su domicilio social en el territorio nacional y sus actividades no se encuentren reguladas por otra ley, sujetarán sus operaciones a las reglas generales que dicte la misma Secretaría y a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria.

Al operar las facultades que la confiere este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria.

Las inversiones a que se refiere este artículo y el anterior, que realicen las instituciones de banca de desarrollo, así como de banca múltiple en cuya capital participe el Gobierno Federal, no computarán para considerarse a las emisoras como empresas de participación estatal, y por lo tanto éstas no estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las entidades de la Administración Pública Federal.

ARTICULO 90.—Para acreditar la personalidad y facultades de los funcionarios de las instituciones de crédito, incluyendo a los delegados fiduciarios, bastará exhibir una certificación de su nombramiento, expedida por el secretario o prosecretario del consejo de administración o consejo directivo.

Los poderes que otorgan las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento, a las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivos leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan al mismo consejo y a la comprobación del nombramiento de los consejeros.

Se entenderá que los poderes conferidos de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia federal, comprenden la facultad de otorgar, suscribir, avalar y endosar títulos de crédito, aun cuando no se mencione expresamente dicha facultad.

Los nombramientos de los funcionarios bancarios deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio, previa ratificación de firmas, ante featurario público, del documento auténtico en que conste el nombramiento respectivo.

Los nombramientos del secretario y prosecretario del consejo de administración o consejo directivo, deberán protocolizarse ante notario público y ser inscritos en el Registro Público de Comercio.

ARTICULO 91.—Las instituciones de crédito responderán directa e ilimitadamente de los actos realizados por sus funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que ellas incurran personalmente.

ARTICULO 92.—Las instituciones de crédito sólo podrán utilizar los servicios de comisionistas que las auxilien en la celebración de sus operaciones, cuando se trate de personas morales que operen con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria.

Los comisionistas se ajustarán a las reglas de carácter general que dicte la propia Secretaría, se someterán a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y en cuanto a las operaciones que les autorice dicha Secretaría se ajustarán a las disposiciones que en relación con tales operaciones establezca el Banco de México. Las será además aplicable lo dispuesto por el artículo 94 de esta Ley.

La citada Secretaría podrá revocar la autorización otorgada a los comisionistas, cuando incurran en violaciones a las disposiciones contenidas en este artículo y

a las reglas y disposiciones que las sean aplicables, sin perjuicio de la sanción correspondiente que imponga la mencionada Comisión.

ARTICULO 93.—Las instituciones de crédito sólo podrán cerrar o descansar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. El Banco de México podrá autorizar excepciones a este artículo.

ARTICULO 94.—La Comisión Nacional Bancaria podrá ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las instituciones de crédito, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, obscuridad, o competencia desleal entre los mismos, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

ARTICULO 95.—Las instituciones de crédito sólo podrán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones en los días que autorice al efecto el reglamento que anualmente expida la Comisión Nacional Bancaria.

Los días autorizados en los citados términos se considerarán inhábiles para todos los efectos legales.

ARTICULO 96.—Las instituciones de crédito deberán establecer medidas básicas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, sus trabajadores y su patrimonio.

Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una unidad especializada.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria, podrá dictar mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que establezcan las instituciones de crédito.

La Comisión Nacional Bancaria vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

ARTICULO 97.—Las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que en el ámbito de sus respectivas competencias, les solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, dentro de los plazos que las mismas establezcan.

Dichas instituciones proporcionarán a la citada Secretaría, en los términos y plazos que ésta determine, la información institucional y de sus empresas a que se refieren los artículos 88 y 89 primer párrafo, de esta Ley, respecto de sus programas operativos y financieros, los presupuestos de ingresos y gastos, e integración de indicadores y demás información financiera, que permita evaluar el comportamiento y desarrollo del Sistema Bancario Mexicano.

ARTICULO 98.—Las operaciones de banca y crédito que realicen las instituciones de crédito y demás integrantes del Sistema Bancario Mexicano, así como los ingresos y utilidades que por los mismos conceptos obtengan, no podrán ser gravados en forma alguna por el Distrito Federal, los Estados o Municipios.

Las instituciones de crédito estarán obligadas a recabar los datos de su clientela, relativos a su identificación y domicilio, de conformidad con las disposiciones que al efecto dicta la Comisión Nacional Bancaria.

CAPITULO II De la Contabilidad

ARTICULO 99.—Todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo de una institución de crédito o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrada en la contabilidad el mismo día en que se efectúen. La contabilidad, los libros y documentos correspondientes y el plazo que deban ser conservados, se regirán por las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión Nacional Bancaria.

ARTICULO 100.—Las instituciones de crédito podrán microfilmear todos aquellos libros, registros y documentos en general, que obren en su poder, relacionados con los actos de la propia institución, que mediante disposiciones de carácter general tenga la Comisión Nacional Bancaria, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación, su manejo y conservación establezca la misma.

Los negativos originales de cámara e impresos de acuerdo a lo señalado por el párrafo anterior, así como sus impresiones debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la institución de crédito, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados.

ARTICULO 101.—La Comisión Nacional Bancaria, mediante disposiciones de carácter general, señalará las bases a que se sujetará la aprobación de los estados financieros mensuales y del balance general anual por parte de los administradores de las instituciones de crédito; su publicación en periódicos de amplia circulación; así como el procedimiento a que se ajustará la revisión que de los mismos efectúe la propia Comisión.

La propia Comisión podrá ordenar correcciones que a su juicio fueren fundamentales y ameriten su publicación, quien podrá acordar que se publiquen con las modificaciones pertinentes y, en su caso esta publicación se hará dentro de los quince días siguientes al acuerdo.

ARTICULO 102.—La Comisión Nacional Bancaria fijará las reglas para la estimación máxima de los activos de las instituciones de crédito y las reglas pa-

ra la estimación mínima de sus obligaciones y responsabilidades.

Estas reglas se fundarán en los principios siguientes:

I. Se estimarán por su valor nominal los créditos y documentos mercantiles pendientes de vencimiento o que hayan sido renovados;

II. Los bienes o mercancías que tengan un mercado regular se estimarán por su cotización;

III. Los bonos, obligaciones y otros títulos de naturaleza análoga que estén al corriente en el pago de sus intereses y amortización, se estimarán al valor presente de los futuros beneficios del título, calculando dicho valor presente al tipo efectivo de interés que devengue el título según el precio en bolsa de valores o, a falta de éste, en el mercado libre en el momento de su adquisición.

Cuando no estén al corriente en el pago de sus intereses y amortización, se estimarán conforme al precio de bolsa o de mercado;

IV. Los títulos representativos de capital de sociedades se valorarán de acuerdo con las reglas que dicte la Comisión Nacional Bancaria;

V. Los inmuebles urbanos se estimarán por el promedio de avalúos que practiquen los peritos de las instituciones que apruebe la Comisión Nacional Bancaria, y

VI. Los bienes que no reúnan las características señaladas en las fracciones anteriores, se estimarán por su valor de adquisición con las deducciones correspondientes al demérito por uso o explotación, en su caso.

Cuando al aplicar las reglas de valoración fijadas por la Comisión Nacional Bancaria resulte una estimación más elevada de los elementos de activo que el valor original de los títulos, efectos, bienes o inversiones, la diferencia no podrá ser aplicada a cuenta de resultados, hasta en tanto no se realice efectivamente el beneficio como consecuencia del cambio, venta, realización o liquidación de los títulos, efectos, bienes o inversiones respectivos, a menos que la Comisión Nacional Bancaria, vista la estabilidad continuada de los precios y cotizaciones y la importancia relativa de las reservas constituidas de este modo, autorice el ajuste de tales fondos con abono a las cuentas de resultados.

Sin perjuicio de las normas establecidas en este artículo, la Comisión Nacional Bancaria podrá proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se autorice, por disposiciones de carácter general a las instituciones de crédito, para que en caso necesario, por baja extraordinaria, mantengan ciertos valores de su activo a la estimación que resulte de sus precios de adquisición, dándoles un plazo que no podrá exceder de cinco años para que regularicen sus valuaciones, y sometidos durante este periodo a las limitaciones respecto a la distribución de utilida-

das que estime adecuado acordar la propia Comisión.

TITULO QUINTO

De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos

CAPITULO I

De las Prohibiciones

ARTICULO 103.—Ninguna persona, física o moral, podrá captar recursos del público en el mercado nacional, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, obligándose ésta a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a:

I. Las instituciones de crédito reguladas en la presente Ley, así como a los demás intermediarios financieros debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables;

II. Los emisores de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, respecto de los recursos provenientes de la colocación de dichos instrumentos, siempre y cuando estos recursos no se utilicen en el otorgamiento de créditos de cualquier naturaleza, y

III. Las personas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre que se sujeten a las reglas que al efecto expida la propia Secretaría y a las disposiciones que respecto de sus operaciones, emita el Banco de México.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México, resolverá sobre las consultas que al respecto se le formulen y podrá establecer criterios de aplicación general conforme a los cuales se precisen, para efectos de este artículo, si hoy o no captación de recursos del público, o bien, los créditos que puedan otorgarse con recursos provenientes de la colocación de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.

ARTICULO 104.—Cuando la Comisión Nacional Bancaria presuma que una persona física o moral está realizando operaciones en contravención de lo dispuesto por los artículos 2o. y 103 de esta Ley, o está infringiendo lo previsto por el primer párrafo del artículo 350 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, podrá nombrar un inspector y los auxiliares necesarios para que revisen la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a fin de verificar si efectivamente está realizando las operaciones mencionadas. En este caso y cumplados con las formalidades esenciales del procedimiento, la Comisión Nacional Bancaria ordenará la suspensión inmediata de las operaciones irregulares e intervendrá administrativamente la negociación, empresa o esta-

blecimiento de la persona física o moral de que se trate, hasta que dichas operaciones queden liquidadas.

La suspensión y los procedimientos de inspección e intervención a que se refiere el párrafo anterior son de interés público. Será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el Capítulo II del Título Séptimo de esta Ley. Los afectados podrán ocurrir en defensa de sus intereses ante la Comisión Nacional Bancaria, sin que ello afecte la suspensión y tales procedimientos.

ARTICULO 105.—Las palabras banco, crédito, ahorro, fiduciario u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, por las que pueda inferirse el ejercicio de la banca y del crédito, no podrán ser usadas en el nombre de personas morales e establecimientos distintos de las instituciones de crédito.

Se exceptúan de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los integrantes del Sistema Bancario Mexicano; a los bancos y entidades financieras del exterior, así como a las sociedades señaladas en los artículos 7o., 88 y 89 de esta Ley; a las que prevén la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las asociaciones de instituciones de crédito u otras personas que sean autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 106.—A las instituciones de crédito les estará prohibido:

- I. Dar en garantía sus propiedades;
- II. Dar en prenda los títulos o valores de su cartera, salvo que se trate de operaciones con el Banco de México, con las instituciones de banca de desarrollo, con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico;
- III. Dar en garantía títulos de crédito que emitan, acepten o conserven en inventario;
- IV. Operar sobre los títulos representativos de su capital, salvo lo dispuesto por el último párrafo de los artículos 19 y 38, así como el 122 de esta Ley;
- V. Celebrar operaciones y otorgar servicios con su clientela en los que se pacten condiciones y términos que se aparten de manera significativa de las condiciones de mercado prevalentes en el momento de su otorgamiento, de las políticas generales de la institución, y de las sanas prácticas y usos bancarios.
- VI. Celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar dobles de la institución sus funcionarios y empleados, salvo que correspondan a prestaciones de carácter laboral otorgadas de manera general; los comisionarios propietarios o suplentes, los auditores externos de la institución; o los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas anteriormente señaladas. La Secreta-

ría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en esta fracción, mediante reglas de carácter general;

VII. Aceptar o pagar documentos o certificar cheques en descubierto, salvo en los casos de apertura de crédito;

VIII. Contraer responsabilidades u obligaciones por cuenta de terceros, distintas de las previstas en la fracción VIII del artículo 46 de esta Ley y con la salvedad a que se refiere la siguiente fracción;

IX. Otorgar fianzas o cauciones, salvo cuando no puedan ser atendidas por las instituciones de fianzas, en virtud de su cuantía y previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las garantías a que se refiere esta fracción habrán de ser por cantidad determinada y exigirán contragarantía en efectivo o en valores de los que puedan adquirir las instituciones de crédito conforme a esta Ley;

X. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos domiciliados, al ceder su domicilio para pagos o notificaciones. Esta disposición deberá hacerse constar en el texto de los documentos en los cuales se exprese el domicilio convencional;

XI. Comerciar con mercancías de cualquier clase, excepto las operaciones con oro, plata y divisas que puedan realizarse en los términos de la presente Ley y de la Ley Orgánica del Banco de México;

XII. Participar en sociedades que no sean de responsabilidad limitada y explotar por su cuenta establecimientos mercantiles o industriales o fincas rústicas, sin perjuicio de la facultad de poseer bonos, obligaciones, acciones u otros títulos de dichas empresas conforme a lo previsto en esta Ley. La Comisión Nacional Bancaria, podrá autorizar que continúen su explotación, cuando las reciban en pago de créditos o para aseguramiento de los ya concertados, sin exceder los plazos a que se refiere la fracción siguiente;

XIII. Adquirir con recursos provenientes de sus pasivos, títulos, valores, o bienes de los señalados en las fracciones I y III del artículo 55 de esta Ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar excepciones, mediante reglas de carácter general.

Cuando una institución de crédito reciba en pago de adeudos o por adjudicación en remate dentro de juicios relacionados con créditos a su favor, títulos o valores, que no deba conservar en su activo, así como bienes o derechos de los señalados en esta fracción, deberá computar su valor estimado en las inversiones con cargo al capital pagado y reservas de capital, y venderlos en el plazo de un año a partir de su adquisición, cuando se trate de títulos o de bienes muebles; de dos años cuando se trate de inmuebles urbanos; y, de tres años cuando se trate de establecimientos mercantiles o industriales o de inmuebles rús-

tos. Estos plazos podrán ser renovados por la Comisión Nacional Bancaria;

XIV. Mantener cuentas de cheques a aquellas personas que en el curso de dos meses hayan librado tres o más de dichos documentos, que presentados en tiempo no hubieran sido pagados por falta de fondos disponibles y válidamente, a no ser que esta falta de fondos se deba a causa no imputable al librador.

Cuando alguna persona incurra en la situación anterior, las instituciones darán a conocer a la Comisión Nacional Bancaria el nombre de la misma, para el efecto de que tal Organismo la dé a conocer a todas las instituciones de crédito del país, las que en un periodo de un año no podrán abrirle cuenta. El interesado podrá acudir ante la citada Comisión a manifestar lo que a su derecho corresponda;

XV. Pagar anticipadamente, en todo o en parte, obligaciones a su cargo derivadas de depósitos bancarios de dinero, préstamos o créditos, bonos, obligaciones subordinadas o reportos;

XVI. Adquirir títulos o valores emitidos o aceptados por ellas o por otras instituciones de crédito; así como readquirir otros títulos, valores o créditos a cargo de terceros que hubieren cedido, salvo el caso de las operaciones de reparto y de las previstas en el artículo 93 de esta Ley;

XVII. Otorgar créditos o préstamos con garantía de:

- a) Los pasivos a que se refieren las fracciones I, incisos b), c) y d) y II a IV del artículo 46 de esta Ley, a su cargo o de cualquier institución de crédito, y
- b) Derechos sobre fideicomisos, mandatos o comisiones que, a su vez, tengan por objeto los pasivos mencionados en el inciso anterior;

XVIII. Celebrar operaciones bancarias activas o pasivas, por un plazo mayor de veinte años, sea cual fuere la forma de documentar las mismas, y

XIX. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley:

a) Celebrar operaciones con la propia institución en el cumplimiento de fideicomisos, mandatos o comisiones. El Banco de México podrá autorizar, mediante disposiciones de carácter general, la realización de determinadas operaciones cuando no impliquen un conflicto de intereses;

b) Responder a los fideicomitantes, mandantes o comitentes, del incumplimiento de los deudores, por los créditos que se otorguen o de los emisores, por los valores que se adquieran, salvo que sea por su culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 356 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por los fondos cuya inversión se les encomienda.

Si el término del fideicomiso, mandato o comisión constituido para el otorgamiento de créditos, éstos no hubieran sido liquidados por los deudores, la insti-

tación deberá transferirles al fideicomitente o fideicomisario, según el caso, o al mandante o comitente, absteniéndose de cubrir su importe.

X. Concluir pacto contrario a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, no producirá efectos jurídicos.

En los contratos de fideicomiso, mandato o comisión se insertarán un forma notaria los párrafos anteriores de este inciso y una declaración de la fiduciario en el sentido de que hizo saber inequívocamente su contenido a las personas de quienes haya recibido bienes para su inversión;

c) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, mandatos o comisiones destinados al otorgamiento de créditos, en que la fiduciario tenga la facultad discrecional, en el otorgamiento de los mismos para realizar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; los miembros del consejo de administración o consejo directivo, según corresponda, tanto propietarios como suplentes, estén o no en funciones; los empleados y funcionarios de la institución; los comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones, los auditores externos de la institución, los miembros del comité técnico del fideicomiso respectivo; los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas citadas, las sociedades en cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o las mismas instituciones, asimismo aquellas personas que el Banco de México determine mediante disposiciones de carácter general, y

d) Administrar líneas rústicas, a menos que hayan recibido la administración para distribuir el patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o arrendadores, o para pagar una obligación o para garantizar su cumplimiento con el valor de la misma línea o de sus productos, y sin que en estos casos la administración exceda del plazo de dos años.

El Banco de México podrá autorizar, mediante reglas generales, excepciones a lo dispuesto en las fracciones XV a XVIII de este artículo, con vista a propiciar la captación de recursos por las instituciones o regular la celebración de operaciones, en los términos más adecuados a la situación del mercado o del sistema bancario.

CAPITULO II

De las Sanciones Administrativas

ARTICULO 107.—El uso de las palabras a que se refiere el artículo 105 de esta Ley, en el nombre de personas morales y establecimientos distintos a los autorizados para ello conforme al mismo precepto, se castigará por la Comisión Nacional Bancaria con multa por cantidad que no sea menor de cien veces ni mayor de cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y la negociación

respectiva será clausurada administrativamente por esa Comisión hasta que su nombre sea cambiado.

ARTICULO 108.—El incumplimiento o la violación de las normas de la presente Ley, de la Ley Orgánica del Banco de México y de las disposiciones que emanen de ellas, por las instituciones de crédito o las sociedades a que se refieren los artículos 7o., 88, 89, tercer párrafo, 92 y 103, fracción III de esta Ley, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión Nacional Bancaria, hasta del uno por ciento del capital pagado y reservas de capital de la institución o sociedad de que se trate o hasta cincuenta mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, debiendo notificarse al consejo de administración o consejo directivo correspondiente.

En la imposición de estas sanciones, la Comisión Nacional Bancaria tomará en cuenta las medidas correctivas que aplique el Banco de México.

ARTICULO 109.—La infracción a cualquiera de las disposiciones de esta Ley, que no tengan sanción especialmente señalada, se castigará con multa equivalente de cien a cincuenta mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que impondrá administrativamente la Comisión Nacional Bancaria.

ARTICULO 110.—Para la imposición de las sanciones previstas en este capítulo, la Comisión Nacional Bancaria deberá oír previamente al interesado y tomar en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta Ley.

Tratándose de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la sanción prevista.

Los afectados podrán ocurrir por escrito ante la Comisión Nacional Bancaria en defensa de sus intereses, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se les notifique la sanción correspondiente, acompañando las pruebas pertinentes e idóneas a efecto de que la propia Comisión resuelva lo conducente.

Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser recurridas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se hubieren notificado. La propia Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida previa audiencia del interesado.

Las sanciones que haya impuesto la Comisión Nacional Bancaria a las instituciones de crédito, en el ejercicio de sus funciones y en los términos de esta Ley, se harán efectivas cargando su importe en la cuenta que lleva el Banco de México a dichas instituciones. Tratándose de las sanciones impuestas a particulares, se harán efectivas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CAPITULO III De los Delitos

ARTICULO 111.—Serán sancionados con prisión de dos a diez años y con multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, o quienes practiquen operaciones en contravención a lo dispuesto por los artículos 2o. y 103 de esta Ley.

ARTICULO 112.—Serán sancionados con prisión de tres meses a tres años y multa de treinta a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando el monto de la operación o quebranto según correspondiera, no exceda del equivalente a quinientas veces el referido salario, cuando exceda dicho monto, serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo señalado:

I. Las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una unidad o persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto patrimonial para la institución;

II. Los empleados y funcionarios de una institución de crédito que, conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el crédito o que se refiera a la fracción anterior, produciendo sus resultados que se indican en la misma;

III. Las personas que para obtener créditos de una institución de crédito presenten avalúos que no correspondan a la realidad, resultando como consecuencia de ello quebranto patrimonial para la institución;

IV. Los empleados y funcionarios de la institución que, conociendo los vicios que señala la fracción anterior, concedan el crédito, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para concederlo y se produzca quebranto patrimonial para la institución.

V. Los empleados y funcionarios de la institución de crédito que autoricen operaciones, o subidas de que éstas resultarán en quebrantos al patrimonio de la institución en la que presten sus servicios.

Se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, consecuentemente, sujetos a iguales sanciones, los empleados y funcionarios de instituciones.

a) Que otorguen créditos a sociedades constituidas con el propósito de obtener financiamientos de instituciones de crédito, o subidas de que las mismas no han integrado el capital que registren los actas constitutivas correspondientes;

b) Que para liberar a un deudor, otorguen créditos o una o varias personas físicas o morales, que se encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los registros de la institución respectiva unos activos por otros;

c) Que otorguen créditos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea conocido, o resulta evidente al evaluar la operación que con ellos se realiza económica para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto patrimonial a la institución;

d) Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o morales a que se refiere el inciso c) anterior;

e) Que a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito en beneficios propio o de terceros, y como consecuencia de ello, resulta quebranto patrimonial a la institución;

VI. Los deudores que no destinen el importe del crédito a los fines pactados, y como consecuencia de ello resulte quebranto patrimonial a la institución, y

VII. Los acreedores que devienen un crédito concedido por alguna institución a fines distintos para los que se otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el otorgamiento del crédito en condiciones preferenciales.

ARTICULO 113.—Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito:

I. Que dolosamente omitan registrar en los términos del artículo 99 de esta Ley, las operaciones efectuadas por la institución de que se trate, o que mediante maniobras alteren los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados, y

II. Que a sabiendas, presenten a la Comisión Nacional Bancaria datos falsos sobre la solvencia del deudor o sobre el valor de las garantías que protegen los créditos, imposibilitándolo a adoptar las medidas necesarias para que se realicen los ajuste, correspondientes en los registros de la institución respectiva.

ARTICULO 114.—Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito que, con independencia de los cargos e ingresos hechos por la institución, por sí o por interpósita persona, reciben indebidamente de los clientes algún beneficio como condición determinante para celebrar cualquier operación, sean sancionados con prisión de tres meses a tres años y con multa de treinta a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, cuando el monto del beneficio no exceda de quinientas veces el salario mínimo, en el momento de cometerse el delito; cuando exceda de dicho monto serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientas a cincuenta mil veces el salario mínimo señalado.

ARTICULO 115.—En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta Ley, se procederá a peti-

ción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria.

Tratándose de los delitos a que se refiere en los artículos 112 y 114 también se podrá proceder a la extinción de la institución de crédito de que se trate.

Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforma a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos.

ARTICULO 116.—Para la imposición de las sanciones y multas previstas en el presente Capítulo y en el II de este Título, respectivamente, se considerará el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse la infracción o delito de que se trate.

TITULO SEXTO

De la Protección de los Intereses del Público

ARTICULO 117.—Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarías federales, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten.

ARTICULO 118.—Con la salvedad de toda clase de información que sea solicitada por la Comisión Nacional Bancaria, la violación del secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, incluso ante las autoridades o tribunales en juicios o reclamaciones que no sean aquellas entabladas por el fideicomitente o fideicomisario, comitente o mandante, contra la institución o viceversa, constituirá a ésta en responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las responsabilidades penales procedentes.

ARTICULO 119.—Los usuarios del servicio de banca y crédito podrán, a su elección, presentar sus

reclamaciones ante la Comisión Nacional Bancaria, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes de la Federación o del orden común. Las instituciones de crédito estarán obligadas, en su caso, a someterse al procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo siguiente.

En el caso en que las reclamaciones se presenten ante la Comisión Nacional Bancaria, ésta conciliará y, en su caso, resolverá las diferencias que se susciten entre las instituciones de crédito y los usuarios del servicio de banca y crédito, derivadas de la realización de operaciones y de la prestación de servicios bancarios. Tratándose de diferencias que surjan respecto al cumplimiento de fideicomisos, sólo conocerá de las reclamaciones que presenten los fideicomitentes o fideicomisarios en contra de los fiduciarios.

La sola presentación de la reclamación que se prevé en este artículo, interrumpe la prescripción.

ARTICULO 120.—Las reclamaciones a que se refiere el artículo anterior, se ajustarán a los buses siguientes:

I. Se presentarán por escrito ante la Comisión Nacional Bancaria, o en su delegación regional correspondiente; en las mismas se correrá traslado a la institución de que se trate, requiriéndole un informe detallado, mismo que deberá presentar por conducto de un representante en la fecha que dicha Comisión señale, de manera perentoria, para la realización de una junta de avenencia para la cual se citará a las partes y que sólo podrá diferirse por una vez;

II. En la junta a que se refiere la fracción anterior, se exhortará a las partes a conciliar sus intereses y si ello no fuera posible la Comisión les invitará a que de común acuerdo la designen árbitro, sea en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, a elección de las mismas. El compromiso correspondiente se hará constar en el acta que al efecto se levante;

III. Las delegaciones regionales podrán tramitar la etapa conciliatoria y, en su caso, el procedimiento arbitral escogido;

IV. En la amigable composición se fijarán las cuestiones que deberán ser objeto del arbitraje y la Comisión tendrá libertad de resolver en conciencia y a buena fe guardada, sin sujeción a las reglas legales, pero observando las formalidades esenciales del procedimiento.

La Comisión tendrá la facultad de allegarse todos los elementos que juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan sometido en arbitraje. No habrá términos ni incidentes y la resolución correspondiente sólo admitirá aclaración de la misma;

V. En el juicio arbitral de estricto derecho las partes formularán compromiso, en el que fijarán igualmente las reglas del procedimiento que conven-

cionalmente establezcan, aplicándose supletoriamente el Código de Comercio, con excepción de los artículos 1217, 1235 y 1296.

Las resoluciones en el juicio arbitral de estricto derecho, dictadas en el curso del procedimiento, admitirán como único recurso el de revocación y el laudo dictado sólo podrá ser impugnado en juicio de amparo.

VI. El incumplimiento o descuido por parte de las instituciones de crédito o los acuerdos o resoluciones dictadas por la Comisión Nacional Bancaria en el curso de los procedimientos establecidos en el presente artículo, serán castigados con multa administrativa que imponga la propia Comisión, por cantidad equivalente de cien a un mil veces el valor mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

VII. El laudo que en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho condena a una institución, le otorgará para su cumplimiento un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación; si no lo efectuare, sin perjuicio de lo señalado en la fracción siguiente, la Comisión Nacional Bancaria, impondrá a la institución una multa hasta de tres veces el importe de la condenada, si este fuera ramplificable o hasta cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, si no lo fuere.

VIII. Cuando se faltare al cumplimiento voluntario de lo convenido en la conciliación o al laudo en la amigable composición o en el juicio arbitral de estricto derecho, la parte afectada deberá acudir a los tribunales competentes, para efectos de ejecución de una u otra resolución, y

IX. Las notificaciones en el juicio arbitral de estricto derecho se harán a las partes por cédula líquida en los estrados de la Comisión Nacional Bancaria o de la delegación regional correspondiente, excepción hecha del traslado de la reclamación, de la demanda, de la citación a la junta conciliatoria y del laudo, que tendrán que hacerse personalmente o por correo certificado con acuse de recibo. Las notificaciones surtirán efecto al día siguiente al en que se efectúen.

ARTICULO 121.—Con el fin de que no se afecten los intereses del público en cuanto a la disponibilidad de afectivo y valores exigibles a las instituciones, en los casos de emplazamientos a huelga, antes de la suspensión de las labores, y en términos de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en ejercicio de sus facultades, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria, cuidará que para el fin mencionado, durante la huelga permanezca abierto el número indispensable de oficinas y continúen laborando los trabajadores, que atendiendo a sus funciones, sean estrictamente necesarios.

ARTICULO 122.—Las instituciones de banca múltiple deberán participar en el mecanismo preventivo

y de protección del ahorro, cuya organización y funcionamiento se sujetará a lo siguiente:

I. El Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que pudieran presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de protección expresa del Fondo.

La constitución del fideicomiso por el Gobierno Federal no le dará el carácter de entidad de la administración pública federal, y por lo tanto, no estará sujeto a las disposiciones aplicables a dichas entidades;

II. Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos, deberá garantizarse el pago puntual y oportuno del apoyo, con acciones representativas del capital social de la propia institución, con valores gubernamentales o cualquier otro bien, que a juicio del fiduciario satisfaga la garantía requerida.

Cuando esta garantía recaiga en acciones representativas del capital social de la institución apoyada, los accionistas primeramente deberán afectar títulos representativos de la serie "A" hasta por el importe de la garantía requerida y, en caso de que los títulos no cubran el total de dicho importe, también deberán de afectar los títulos correspondientes a los demás series. Dichas acciones garantizarán el pago del apoyo en la proporción a prorrata que corresponda conforme al valor de cada una de ellas.

Para los efectos de la garantía antes citada, las acciones se considerarán por el equivalente al setenta y cinco por ciento de su valor en libras, según el último estado financiero aprobado por el consejo de administración de la institución y revisado por la Comisión Nacional Bancaria.

En caso de que no se otorgue garantía solicitada el director general de la institución de que se trate, o quien ejerza sus funciones, deberá otorgar en garantía tales acciones, en términos de lo dispuesto en los párrafos anteriores. Al efecto, la institución para el depósito de valores que se encuentren las referidas acciones, o petición por escrito del director general de la institución de banca múltiple, o de quien ejerza sus funciones, las trasladará y mantendrá en garantía en términos de lo antes señalado a favor del Fondo, comunicándolo así a los titulares de las mismas.

En el evento de que el director general, o quien ejerza sus funciones, no otorgue la garantía antes señalada, la institución para el depósito de valores respectiva deberá afectar en garantía dichas acciones en términos de lo dispuesto en los párrafos anteriores.

res, basando el efecto solicitud por escrito por parte del Fondo.

En los estatutos y en los títulos representativos del capital de las instituciones de banca múltiple, deberá preverse expresamente el consentimiento de todos y cada uno de los accionistas al procedimiento contenido en los dos párrafos anteriores;

III. Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a cubrir al Fondo el importe de las aportaciones ordinarias y extraordinarias que determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a propuesta del Banco de México.

Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de cada institución correspondientes a un año natural, no excederán respectivamente del cinco al millar y del siete al millar del importe al que ascienden las obligaciones objeto de protección expresa del Fondo;

IV. En el contrato constitutivo del Fondo deberá preverse la existencia de un comité técnico que estará integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria.

El comité técnico determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al Fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de éstos objeto de protección expresa, la periodicidad con la que habrán de cubriarse las aportaciones ordinarias, así como, las demás facultades que se prevean en el contrato constitutivo del Fondo.

El fiduciario publicará anualmente en el mes de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación, el importe máximo de las obligaciones que será objeto de protección expresa del Fondo durante el año inmediato siguiente;

V. Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a proporcionar al Fondo la información que éste le solicite, para cumplir con sus fines, así como a poner en conocimiento del mismo, con toda oportunidad, cualquier problema que confronten y que, a su juicio, pueda dar lugar a apoyos del Fondo. Asimismo, las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a recibir los apoyos que a propuesta del comité técnico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estime necesarios y a cumplir con los programas o medidas correctivos que el Fondo les apruebe;

VI. Las sociedades que, con posterioridad a la fecha de constitución del Fondo, obtengan autorización para constituirse y operar como instituciones de banca múltiple en términos de la presente Ley, estarán obligadas a aportar al Fondo la cantidad inicial que resulte de aplicar al importe del patrimonio neto del propio Fondo, el porcentaje que el capital del banco de que se trate, represente del capital neto del conjunto de los bancos múltiples.

VII. El Banco de México cargará, en las cuentas que lleva a las instituciones de banca múltiple, el importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias que éstas deben cubrir conforme a lo dispuesto en el presente artículo, precisamente en las fechas en que tales pagos deben efectuarse. Las cantidades así cargadas serán abonadas simultáneamente al Fondo.

TÍTULO SEPTIMO

De la Comisión Nacional Bancaria

CAPÍTULO I

De su Organización y Funcionamiento

ARTÍCULO 123.—La inspección y vigilancia de las instituciones de crédito en la prestación del servicio de banca y crédito y el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, quedan confiadas a la Comisión Nacional Bancaria.

Será atribución de esa Comisión, aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria, y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, así como las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que corresponden a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en los términos de la propia Ley, competen aplicar a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

ARTÍCULO 124.—Las instituciones de crédito y las sociedades o establecimientos sujetos conforme a esta Ley, a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria, deberán cubrir las cuotas correspondientes en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Las cuotas a que se refiere este artículo y el presupuesto de egresos de la Comisión no formarán parte de los ingresos del Gobierno Federal ni figurarán en sus presupuestos.

ARTÍCULO 125.—La Comisión Nacional Bancaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tendrá las facultades y deberes siguientes:

I. Realizar la inspección y vigilancia, e imponer las sanciones que conforme a esta y otras leyes le competen;

II. Funcionar como órgano de consulta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos que la ley determine;

III. Realizar los estudios que le encomienda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto del régimen bancario y de crédito; asimismo, presentará a dicha Dependencia y al Banco de México, propuestas, cuando así lo estime conveniente, respecto de dicho régimen;

IV. Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la Ley le otorga y para el eficaz cumplimiento de la misma y de los reglamentos

tos que con base en ella se expidan, así como condicionar, mediante la expedición de disposiciones e instrucciones a las instituciones de crédito, con la política de regulación monetaria y crediticia que compete al Banco de México, siguiendo las instrucciones que reciba del mismo.

V. Presentar opinión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la interpretación de esta Ley y demás relativos en caso de duda respecto a su aplicación.

VI. Formular su reglamento interior que someterá a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o intervenir en los términos y condiciones que esta Ley señala en la elaboración de los reglamentos a que la misma se refiere;

VII. Formular anualmente sus presupuestos que someterá a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VIII. Rendir un informe anual de sus labores a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IX. Proveer lo necesario para que las instituciones de crédito cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios concertados con los usuarios del servicio de banca y crédito, y las sociedades a que se refiere el artículo 88 de esta Ley con los compromisos contractados;

X. Imponer las sanciones que en términos de esta Ley apruebe la Junta de Gobierno; y

XI. Las demás que le están atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado "B" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por otras leyes.

La Comisión Nacional Bancaria en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, respecto de las operaciones que las instituciones de crédito lleven a cabo en términos de la Ley del Mercado de Valores, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios con la Comisión Nacional de Valores, para el eficaz cumplimiento de las disposiciones en la materia.

ARTICULO 126.—La Comisión Nacional Bancaria, para el cumplimiento de sus funciones contará con:

- I. Junta de Gobierno;
- II. Presidencia;
- III. Vicepresidencias;
- IV. Direcciones Generales;
- V. Delegaciones Regionales; y
- VI. Demás servidores públicos necesarios.

ARTICULO 127.—La Junta de Gobierno estará integrada por once vocales, más el Presidente y los Vicepresidentes de la Comisión. Cuatro de ellos serán designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, tres por el Banco de México,

y uno por la Comisión Nacional de Valores. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público designará los otros dos vocales, quienes no deberán ser servidores públicos de esa Dependencia. Por cada propietario se nombrará un suplente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público nombrará al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria, que lo será a su vez de la Junta de Gobierno y deberá reunir los requisitos que para ocupar el cargo de director general, señala el artículo 24 de esta Ley.

Los vocales deberán ser de nacionalidad mexicana, de reconocida calidad moral, experiencia y prestigio en materias económica y financiera y no podrán desempeñar cargos de elección popular, ni ser empleados, funcionarios, comisarios apoderados o agentes de las instituciones, y demás establecimientos sujetos a la inspección y vigilancia de la Comisión.

ARTICULO 128.—La Junta de Gobierno podrá constituir subcomités con fines especiales y designar una comisión de cuentas integrada por dos vocales, que se encargará de vigilar el manejo de los fondos del Organismo. A propuesta de Presidente, nombrará un secretario de actas.

ARTICULO 129.—Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de las facultades de la Comisión, sin perjuicio de las asignadas al Presidente.

ARTICULO 130.—La Junta de Gobierno celebrará sesiones siempre que sea convocada por su Presidente y por lo menos se reunirá una vez al mes.

Habrá quórum con la presencia de la mitad más uno de los miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes, y el Presidente, quien dirigirá los debates y dará cuenta de los asuntos en cartera, tendrá voto de calidad en los casos de empate.

Las resoluciones y recomendaciones que apruebe la Junta serán comunicadas después de cada sesión a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán ejecutivos y corresponderá al Presidente, en ejercicio de sus atribuciones, darles oportuno cumplimiento.

ARTICULO 131.—El Presidente es la máxima autoridad administrativa de la Comisión y ejercerá sus funciones directamente o por medio de los vicepresidentes, directores generales, delegados y demás servidores públicos de la propia Comisión. En las ausencias temporales del Presidente será sustituido por el vocal vicepresidente que designe al efecto.

Serán facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión:

- I. Inspeccionar y vigilar las instituciones de crédito provenientes en los términos de esta Ley y demás relativos, el eficaz cumplimiento de sus preceptos;
- II. Intervenir en la emisión de títulos o valores, en los sorteos y en la cancelación de documentos, titu-

los y obligaciones, en los términos de ley, cuidando que la circulación de los mismos no exceda de los límites legales;

III. Intervenir en los arques, cortes de caja y demás comprobaciones o verificaciones de contabilidad de las instituciones sometidas a su inspección y estimar los valores de su activo de acuerdo con el artículo 102 de esta Ley;

IV. Elaborar y publicar las estadísticas relativas a las instituciones de crédito y a sus operaciones;

V. Intervenir en los procedimientos de liquidación en los términos de ley;

VI. Informar a la Junta de Gobierno, trimestralmente o cuando ésta se lo solicite sobre los labores de las oficinas a su cargo, y obtener su aprobación para la aplicación de las sanciones, así como para todas las disposiciones de carácter general o reglamentaria que crea pertinentes;

VII. Informar al Banco de México de los datos que tenga sobre el estado de solvencia de las instituciones de crédito;

VIII. Formular anualmente el presupuesto de egresos de la Comisión, el cual una vez aprobado por la Junta de Gobierno, será sometido a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IX. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la designación de los vocales vicopresidentes;

X. Nombrar y remover, con la aprobación de la Junta de Gobierno, a los directores generales de la Comisión y designar y remover al resto del personal de la Comisión;

XI. Vigilar la debida ejecución de las disposiciones y de los acuerdos de la Junta de Gobierno;

XII. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre su actuación y sobre los casos concretos que ésta le solicite;

XIII. Ordenar visitas o inspecciones distintas a las señaladas en el artículo 133 de esta Ley, y en su caso llevarlas a cabo;

XIV. Representar con los más amplios facultades a la Comisión Nacional Bancaria, cuando realice todas aquellas funciones que a dicha Organo encomiendan las leyes, sus reglamentos y los acuerdos correspondientes de la Junta de Gobierno;

XV. Investigar los actos de terceros que hagan suponer la realización de operaciones violatorias de las disposiciones de esta Ley, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los presuntos responsables; en su caso, ordenar su intervención o proponer su clausura;

XVI. Representar a la Comisión Nacional Bancaria en los compromisos arbitrales, en los términos que dispongan las respectivas leyes, así como dictar el laudo correspondiente, y

XVII. Las demás que le sean atribuidas por esta Ley y otras disposiciones legales.

ARTICULO 132.—La Comisión Nacional Bancaria contará con delegaciones regionales, las que dentro del área de su jurisdicción geográfica podrán realizar las funciones que se determinan en el Reglamento Interior de la Comisión, que expedirá el Ejecutivo Federal.

CAPITULO II

De la Inspección y Vigilancia

ARTICULO 133.—La inspección se sujetará al reglamento que al efecto expida el Ejecutivo Federal y se efectuará a través de visitas que tendrán por objeto: revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiera afectar la posición financiera y legal, constante o deba constar en los registros, a fin de que se asegure el cumplimiento de las disposiciones que los rigen y a las sanas prácticas de la materia.

Las visitas podrán ser ordinarias, especiales y de investigación. Las primeras se llevarán a cabo de conformidad con el programa anual que apruebe el Presidente de la Comisión; las segundas se practicarán siempre que sea necesario y juicio del Presidente para examinar, y en su caso, corregir situaciones especiales operativas, y las de investigación que tendrán por objeto aclarar una situación específica.

ARTICULO 134.—La vigilancia consistirá en cuidar que las instituciones cumplan con las disposiciones de esta Ley y las que deriven de la misma, y atiendan las observaciones e indicaciones de la Comisión, como resultado de las visitas de inspección practicadas.

Las medidas adoptadas en ejercicio de esta facultad serán preventivas para preservar la estabilidad y solvencia de las instituciones, y normativas para definir criterios y establecer reglas y procedimientos a los que deben ajustarse el funcionamiento, conforme a lo previsto en esta Ley.

ARTICULO 135.—Las instituciones de crédito y las sociedades sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión, estarán obligadas a prestar a los inspectores todo el apoyo que se les requiera, proporcionando los datos, informes, registros, libros de actas, asientos, documentos, correspondencia y en general, la documentación que los mismos estimen necesaria para el cumplimiento de su cometido; pudiendo tener acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones.

ARTICULO 136.—Los visitadores e inspectores serán personas de notorios conocimientos en materia financiera comprobados en los términos que determine el reglamento interior de la Comisión, y ni ellos ni el resto del personal podrán obtener de las instituciones sujetas a inspección, préstamos o serles deudores por cualquier título bajo la pena de destitución inme-

dada. Se exceptúan las operaciones que se realicen con la aprobación expresa de la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 137.—Cuando en virtud de la inspección se encuentre que operaciones de alguna institución de crédito no están realizadas en los términos de las disposiciones aplicables, el Presidente, con acuerdo de la Junta de Gobierno, dictará las medidas necesarias para normalizarlas, señalando un plazo para tal efecto. Si transcurrido el plazo, la institución de que se trate no ha regularizado las operaciones en cuestión, el Presidente, cuando lo estime necesario por su importancia, comunicará tal situación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso al Banco de México, con objeto de que aquella tome las medidas pertinentes. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, el Presidente, con acuerdo de la Junta de Gobierno, podrá disponer que un inspector intervenga la institución, a fin de normalizar las operaciones que se hayan considerado irregulares.

La intervención administrativa se llevará a cabo directamente por el interventor, quien realizará los actos necesarios para cumplir los objetivos que se señalan en el acuerdo correspondiente, en los términos del reglamento de inspección y del reglamento interior de la Comisión Nacional Bancaria.

ARTÍCULO 138.—Cuando a juicio de la Comisión Nacional Bancaria, existan irregularidades de cualquier género en las instituciones de crédito, el Presidente de dicho Órgano, podrá proceder en los términos del artículo anterior; pero si esas irregularidades afectan la estabilidad o solvencia de aquéllas y ponen en peligro los intereses del público o acreedores, el Presidente podrá de inmediato, con acuerdo de la Junta de Gobierno declarar la intervención con carácter de gerencia, de la institución de que se trate y designar, sin que para ello requiera acuerdo de la Junta de Gobierno, a la persona física que se haga cargo de la institución, con el carácter de interventor-gerente.

ARTÍCULO 139.—La intervención administrativa de que habla el artículo anterior se llevará a cabo directamente por un interventor-gerente, y al iniciarse dicha intervención se entenderá con el principal funcionario de la institución que se encuentre en las oficinas de ésta.

ARTÍCULO 140.—El interventor-gerente tendrá todas las facultades que normalmente correspondan al consejo de administración de la institución y plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querrelas y desistir de estas últimas, previa acuerdo del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria, y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, y revocar

los que estuvieren otorgados por la institución intervenida y los que el mismo hubiera conferido.

El interventor-gerente no quedará sujeta a su actuación a la asamblea de accionistas ni al consejo de administración.

ARTÍCULO 141.—El oficio que contenga el nombramiento de interventor-gerente deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio de la institución intervenida, sin más requisitos que el oficio respectivo de la Comisión Nacional Bancaria.

ARTÍCULO 142.—Desde el momento de la intervención quedará sujeta a las facultades del interventor-gerente todas las facultades del consejo de administración y los poderes de las personas que el interventor determine, pero la asamblea de accionistas podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le competen, y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la sociedad, y para opinar sobre los asuntos que el mismo interventor-gerente someta a su consideración. El interventor-gerente podrá citar a asamblea de accionistas y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes.

ARTÍCULO 143.—Cuando la Comisión Nacional Bancaria acuerde levantar la intervención con carácter de gerencia, lo comunicará así al encargado del Registro Público de Comercio que haya hecho la inscripción a que se refiere el artículo 141 de esta Ley, a efectos de que cancele la inscripción respectiva.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.—La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO.—Se abroga la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, pero deberá continuar aplicándose, en el caso de las personas que se encuentren procesadas o sentenciadas, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo III del Título Cuarto de la Ley que se abroga por los hechos ejecutados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO.—Cuando las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas hagan referencia a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, se entenderá que se hace para esta Ley, en las materias que regula.

ARTÍCULO CUARTO.—En tanto el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, dictan los reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere esta Ley,

seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la vigencia de la misma, en las materias correspondientes.

Al expedirse las disposiciones a que se refiere este artículo, se señalarán expresamente aquéllas a las que sustituyan y quedan derogadas.

ARTICULO QUINTO.—Las autorizaciones y demás medidas administrativas dictadas con fundamento en la Ley que se abroga, que se prevengan en esta Ley, continuarán en vigor hasta que no sean revocadas o modificadas por la autoridad competente.

ARTICULO SEXTO.—Los asuntos a que se refiere el inciso a), fracción XVIII del artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito abrogada, que se estuvieren tramitando ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continuarán desahogándose ante la misma hasta su total terminación.

ARTICULO SEPTIMO.—El Ejecutivo Federal, en un plazo de trescientos sesenta días contados a partir de la vigencia de esta Ley, expedirá los decretos mediante los cuales se transforman las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, en sociedades anónimas y de acuerdo con las bases siguientes:

I. Los consejos directivos, tomando en cuenta la opinión de las comisiones consultivas y los dictámenes de los comités, someterán a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los acuerdos de transformación, mismos que deberán contener los datos financieros de las sociedades, los planes para realizar el canje de los certificados de aportación patrimonial por acciones y los acuerdos para llevar a cabo la transformación;

II. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalará la forma y términos en que deberá llevarse a cabo la transformación, cuidando en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público;

III. Los acuerdos de transformación se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en la plaza en que tenga su domicilio la sociedad. Las transformaciones surtirán efectos en la fecha que se indique en los decretos respectivos;

IV. Los acreedores de las sociedades no podrán oponerse a la transformación.

Los titulares de los certificados de la serie "B", tendrán derecho de separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus títulos a su valor en libros según el último estado financiero aprobado por el consejo directivo y revisado por la Comisión Nacional Bancaria, siempre que lo soliciten dentro del plazo de noventa días siguientes a aquél en que surta efectos la transformación;

V. Los decretos a que se refiere este artículo y

los acuerdos de transformación, se inscribirán en el Registro Público de Comercio;

VI. Mientras se llevan a cabo las citadas transformaciones, los aspectos corporativos de las instituciones, seguirán rigiéndose por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y demás disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, debiendo el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proveer lo necesario a efecto de que las instituciones a que se refiere el presente artículo continúen prestando de manera adecuada y eficiente el servicio de banca y crédito.

Una vez transformados y, hasta en tanto se aprueben los estatutos de las mismas, se seguirán aplicando los respectivos reglamentos orgánicos;

VII. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará a conocer a través del Diario Oficial de la Federación, los términos conforme a los cuales deberán celebrarse las asambleas de accionistas de las instituciones de banca múltiple, a fin de que se aprueben los estatutos de las respectivas instituciones;

VIII. La conversión de certificados de aportación patrimonial en acciones se llevará a cabo en la fecha en que surta efectos la transformación, y se realizará conforme a lo siguiente:

a) El cincuenta y uno por ciento del capital de la institución, representado por los certificados de aportación patrimonial de la serie "A", se canjearán por acciones de la serie "A" a que se refiere la fracción I del artículo 11 de esta Ley, y

b) El quince por ciento restante del capital de la institución representado por los certificados de aportación patrimonial de la serie "A", así como la totalidad de los certificados de aportación patrimonial de la serie "B", se convertirán en acciones de la serie "B" previstas en la fracción II del artículo 11 referido.

Los accionales que resulten de la conversión, deberán representar la misma participación del capital pagado que los certificados de aportación patrimonial respectivos.

Por las operaciones previstas en los incisos anteriores, así como por las permutas de acciones en las que sea parte el Gobierno Federal, no se causará gravamen fiscal alguno.

Para efectos fiscales, el costo de adquisición de la acción será el correspondiente al del certificado de aportación patrimonial que fue objeto de cambio.

IX. Los directores generales, así como los consejeros y comités de las series "A" y "B", de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, continuarán en el desempeño de sus funciones mientras no se realicen nuevas designaciones y los designados tomen posesión de sus cargos;

X. Al transformarse las instituciones de banca múltiple conservarán su misma personalidad jurídica

y patrimonio, por lo que los bienes y derechos de que es titular la institución, así como sus obligaciones, incluyendo las de carácter laboral y fiscal, no tendrán modificación;

XI. Los derechos y obligaciones de los trabajadores de las sociedades que se transformen no sufrirán, por ese acto, modificación alguna;

XII. Se entenderán referidas a las instituciones de banca múltiple, sociedades anónimas, las inscripciones y anotaciones marginales de cualquier naturaleza efectuadas en los registros públicos de la propiedad y del comercio, así como en cualquier otro registro, relativos a las correspondientes instituciones de banca múltiple, sociedades nacionales de crédito.

Asimismo, corresponderán a las instituciones de banca múltiple, sociedades anónimas, las acciones, excepciones, defensas y recursos de cualquier naturaleza, deducidos en los juicios o procedimientos en los cuales las instituciones de banca múltiple, sociedades nacionales de crédito, tengan interés jurídico.

Los poderes, mandatos, designaciones de delegados fiduciarios y, en general, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por las sociedades que se transforman, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados expresamente, y

XIII. Llevada a cabo la transformación, cuando las leyes y disposiciones administrativas hagan referencia a las instituciones de banca múltiple, sociedades nacionales de crédito, se entenderá que se hace a las instituciones de banca múltiple, sociedades anónimas.

ARTICULO OCTAVO.—Las instituciones de banca múltiple que dejen de tener el carácter de entidades de la administración pública federal, mantendrán para sus trabajadores los derechos, beneficios y prestaciones que hayan venido otorgando.

Dichas instituciones seguirán sujetándose a las condiciones generales de trabajo expedidas por ellos, en tanto se celebren los correspondientes contratos colectivos, de los que sean titulares los sindicatos actualmente existentes. Estos y los que, en su caso, posteriormente se constituyan, continuarán integrándose por trabajadores que laboren en la misma institución.

ARTICULO NOVENO.—Los procedimientos de conciliación a que se refieren los artículos 95 y 96 de la Ley Reglamentaria de Servicio Público de Banca y Crédito, que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su total terminación conforme al Ordenamiento citado en primer término.

ARTICULO DECIMO.—El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente, y el Banco de México, realizarán las modificaciones procedentes al

contrato constitutivo del Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple, constituido de conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que se abroga, para hacer los ajustes, a los términos previstos en el artículo 122 de esta Ley, en un plazo de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTICULO DECIMOPRIMERO.—En tanto se modifican las leyes orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo, las remisiones expresas contenidas en dichos ordenamientos relativas a preceptos específicos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito que se abroga, se entenderán referidas a los artículos correspondientes de la presente Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procederá a realizar los trámites conducentes a modificar los reglamentos orgánicos de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, a fin de adecuarlos a los términos de esta Ordenamiento, en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, que no cuenten con ley orgánica se regirán por esta Ley y por las disposiciones administrativas que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tanto el Congreso de la Unión expida las leyes orgánicas respectivas.

ARTICULO DECIMASEGUNDO.—El Banco de México, en materia de elaboración y aprobación de sus presupuestos anuales, así como de administración de sueldos y prestaciones, sólo se sujetará a lo dispuesto por su Ley Orgánica y a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO DECIMOTERCERO.—Las actuales instituciones de banca múltiple, y el Banco Obrero, S.A., se entenderán autorizados para operar como instituciones de crédito en los términos de esta Ley.

Banco Obrero, S.A., en un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, someterá a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el proyecto de modificaciones a sus estatutos sociales, y solicitará la adecuación a los términos señalados en este Ordenamiento, del acto administrativo al amparo del cual funciona.

ARTICULO DECIMOCUARTO.—Las sucursales en México de bancos extranjeros que cuenten con concesión del Gobierno Federal, continuarán regidas por las disposiciones conforme a las cuales vienen operando, hasta en tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no autorice su modificación.

A dichas sucursales les serán aplicables, desde la entrada en vigor de esta Ley, lo previsto en los artículos 73, 76 y 122

ARTICULO DECIMOQUINTO.—El plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 61 de esta Ley, se computará a partir de la fecha en que entre en vigor la misma, para aquellas operaciones constituidas con anterioridad a esta última fecha.

Las instituciones de crédito deberán dar a conocer a los depositantes lo previsto en este artículo, mediante aviso dado por escrito a través de publicaciones en periódicos de amplia circulación o de su colocación en los lugares abiertos al público en las oficinas de éstas, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTICULO DECIMOSEXTO.—Los procedimientos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en los que sean parte funcionarios o empleados de las instituciones de banca múltiple, que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su total terminación en términos de la citada Ley.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO.—Los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple, deberán presentar la declaración de situación patrimonial a que se refiere la fracción II del artículo 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro del plazo señalado en dicha fracción, el cual se computará a partir de la fecha en que el Gobierno Federal deje de tener el control, por su participación accionaria, en dichas instituciones.

ARTICULO DECIMOCTAVO.—Los administradores de las cajas de ahorro, cooperativas de ahorro y préstamo, y demás sociedades que hayan iniciado operaciones con anterioridad a la vigencia de esta Ley y, que puedan estar sujetas a la prohibición contenida en el artículo 103 y formen, dentro de un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, la consulta prevista en el párrafo final de dicho artículo, no se harán acreedoras a las sanciones establecidas en la propia Ley, sino hasta que, habiendo determinado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se trata de captación de recursos del público no autorizada, esta última se continúe realizando. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dar autorizaciones temporales, cuando estime que las condiciones de las operaciones respectivas puedan dar lugar, en su caso, a autorización definitiva.

ARTICULO DECIMONOVENO.—Los procedimientos de conciliación laboral previstos en el artículo 80 de las Condiciones Generales de Trabajo de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca múltiple, que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se continuarán tramitando hasta su total terminación, en términos de las mencionadas condiciones.

ARTICULO VIGESIMO.—El Sector Social orga-

nización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las leyes relativas, podrá concurrir con responsabilidad social a la prestación del servicio de banca y crédito, en los términos de esta Ley de las autorizaciones que con sujeción a la misma se explijan al efecto.

México, D.F., 14 de julio de 1970.—Dip. Humberto Roque Villanueva, Presidente.—Sen. Enrique Burgos García, Presidente.—Dip. Hilda Anderson Nevárez de Rojas, Secretaria.—Sen. José Joaquín González Castro, Secretaria.—Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de julio de mil novecientos setenta.—Carlos Salinas de Gortari.—Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.—Rúbrica.

-----oOo-----

LEY para regular las agrupaciones financieras.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.—Presidencia de la República.

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, saludó:

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dimitirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

LEY PARA REGULAR LAS AGROPACIONES FINANCIERAS

TITULO PRIMERO

De las Disposiciones Preliminares

ARTICULO 1o.—La presente Ley tiene por objeto regular las bases de organización y funcionamiento de los grupos financieros; establecer los términos bajo los cuales habrán de operar, así como la protección de los intereses de quienes celebren operaciones con los integrantes de dichos grupos.

ARTICULO 2o.—Las autoridades financieras, cada una en la esfera de su respectiva competencia, ejercerán sus atribuciones procurando: el desarrollo equilibrado del sistema financiero del país, con una apropiada cobertura regional; una adecuada competencia entre los integrantes de dicho sistema, la prestación de los servicios integrados conforme a sus prácticas y usos financieros; el fomento del que-

C O N C L U S I O N E S

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

PRIMERA. EL FIDEICOMISO SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO CON LA INTERVENCION DE UNA INSTITUCION FIDUCIARIA LO QUE LE ATRIBUYE SIEMPRE EL CARACTER DE ACTO DE COMERCIO E IMPIDE QUE SE CONSIDERE COMO UN NEGOCIO SECRETO.

SEGUNDA. EL FIDEICOMISO ES UN NEGOCIO JURIDICO FORMAL QUE EN LA PRACTICA SE CONSTITUYE CONTRACTUALMENTE, O UNILATERALMENTE POR DISPOSICION TESTAMENTARIA, NO PUEDE EXCEDER DE TREINTA AÑOS Y SALVO CUANDO SE CONSTITUYE POR DISPOSICION TESTAMENTARIA ES TRASLATIVO DE DOMINIO.

TERCERA. EL FIDUCIARIO NO PUEDE SER FIDEICOMISARIO.

CUARTA. EL FIDUCIARIO ES EL TITULAR DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO, AUNQUE LA POSESION NORMALMENTE CORRESPONDE AL FIDEICOMITENTE O AL FIDEICOMISARIO.

QUINTA. LA CAUSA O EL FIN DEL FIDEICOMISO CONSISTE EN QUE EL FIDUCIARIO REALICE LOS ACTOS Y NEGOCIOS QUE LE ENCOMIENDE EL FIDEICOMITENTE Y DESTINE A ELIOS LOS BIENES Y DERECHOS QUE RECIBA.

SEXTA. A LA CONFIANZA, LOS ANGLOSAJONES LE DENOMINAN TRUST, QUE PRECISAMENTE ES EL NOMBRE CON QUE DESIGNA UNA OPERACION IDENTICA A NUESTRO FIDEICOMISO.

SEPTIMA. EL USE FUE EL ANTECEDENTE DEL TRUST, MISMO QUE SE DESARROLLO CON BASE EN EL DECIDIDO APOYO DE LOS TRIBUNALES DE EQUITY.

OCTAVA. EN NUESTRO PAIS, A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, SE UTILIZO EL TRUST COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA EN EMISIONES DE BONOS DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE FERROCARRILES.

NOVENA. LOS FIDEICOMISARIOS DEBEN TENER LA CAPACIDAD NECESARIA QUE EL FIDEICOMISO IMPLICA.

DECIMA. EL FIDEICOMISO CON INMUEBLES UBICADOS EN LA FRANJA PROHIBIDA, NO ES TRASLATIVO DE DOMINIO A LOS FIDEICOMISARIOS.

DECIMAPRIMERA. SON ELEMENTOS PERSONALES DEL FIDEICOMISO EL FIDEICOMITENTE, FIDUCIARIO Y FIDEICOMISARIO, BASTANDO PARA SU CONSTITUCION LOS DOS PRIMEROS.

DECIMASEGUNDA. LA TEORIA TRADICIONAL SOBRE EL PATRIMONIO COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD PREVALECE SOBRE LA LLAMADA PATRIMONIO DE AFECTACION.

DECIMATERCERA. LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA, ES UNA NORMA DE ORDEN PUBLICO, QUE TUTELA LA SEGURIDAD DE LA NACION, SI LLEGARA A CONSTITUIRSE ALGUN FIDEICOMISO CONTRARIO A DICHA DISPOSICION ESTARIA AFECTADO DE NULIDAD ABSOLUTA.

DECIMACUARTA. LAS APLICACIONES SUSCEPTIBLES DE DESARROLLAR EN FIDEICOMISOS QUE OPERAN CON INMUEBLES EN FRANJAS PROHIBIDAS SON DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE ESAS REGIONES Y DE LA NACION EN GENERAL.

DECIMAQUINTA. LOS FIDEICOMISOS EN QUE INTERVENGAN EXTRANJEROS O POR MEDIO DE LOS CUALES RECIBAN BENEFICIOS, DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS.

B I B L I O G R A F I A

BIBLIOGRAFIA

1. ALBALADEJO, MANUEL. EL NEGOCIO JURIDICO.
2. ALFARO J., RICARDO. ADAPTACION DEL TRUST DEL DERECHO ANGLOSA-
JON AL DERECHO CIVIL.
3. BARRERA GRAFF, JORGE. ESTUDIOS DE DERECHO MERCANTIL.
4. BAUCHE GARCADIAGO, MARIO. OPERACIONES BANCARIAS.
5. BATIZA, RODOLFO. EL FIDEICOMISO, TEORIA Y PRACTICA.
6. BOJALIL, JULIAN. EL FIDEICOMISO.
7. BORJA MARTINEZ, MANUEL. EL CONTRATO ATIPICO.
8. CERVANTES AHUMADA, RAUL. TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.
9. DAVALOS MEJIA, CARLOS. TITULOS Y CONTRATOS DE CREDITO.
10. DE PINA VARA, RAFAEL. ELEMENTOS DE DERECHO MERCANTIL MEXICANO
11. DOMINGUEZ MARTINEZ, R. EL FIDEICOMISO ANTE LA TEORIA GENERAL
DEL NEGOCIO JURIDICO.
12. GARCIA MAYNEZ, EDUARDO. INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO.
13. GARCIA MALDONADO, J. LA INVERSION EXTRANJERA EN LAS ZONAS
TURISTICAS.
14. HERNANDEZ OCTAVIO, A. DERECHO BANCARIO MEXICANO.
15. LANDERRECHE OBREGON. LA NATURALEZA DEL FIDEICOMISO EN EL
DERECHO MEXICANO.

16. LEPAULLE, PIERRE. NATURALEZA DEL TRUST.
17. LOREDO LOPEZ, ALFONSO. ANTICONSTITUCIONALIDAD DEL FIDEICOMISO
EN ZONAS PROHIBIDAS.
18. MACEDO, PABLO. LA NATURALEZA DEL TRUST.
19. RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JOAQUIN. TRATADO DE DERECHO MERCANTIL.
20. ROJINA VILLEGAS, R. COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.
21. ZAMORA PIERCE, JESUS. DERECHO PROCESAL MERCANTIL.

LEGISLACION.

1. CONSTITUCION POLITICA.
2. LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.
3. CODIGO DE COMERCIO.
4. CODIGO CIVIL.
5. LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
6. LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.
7. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.
8. LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y REGULAR LA INVERSION
EXTRANJERA.
9. REGLAMENTO DE LA LEY PARA PROMOVER LA INVERSION MEXICANA Y
REGULAR LA INVERSION EXTRANJERA.

PUBLICACIONES.

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.